

CONTRALÍNEA

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

CONSEJERÍA JURÍDICA DE PRESIDENCIA OBSTRUYE DERECHO AL AGUA DE INDÍGENAS DE OAXACA



ISSN: 1665-1626

REVISTA SEMANAL

Del 4 al 10 de enero de 2021



Año 19 • Número 727 • \$30

POSIBLE CRECIMIENTO
DE LA INSEGURIDAD EN 2021

CARRERA POR VACUNA ANTI-COVID
RECONFIGURÓ MAPA POLÍTICO MUNDIAL

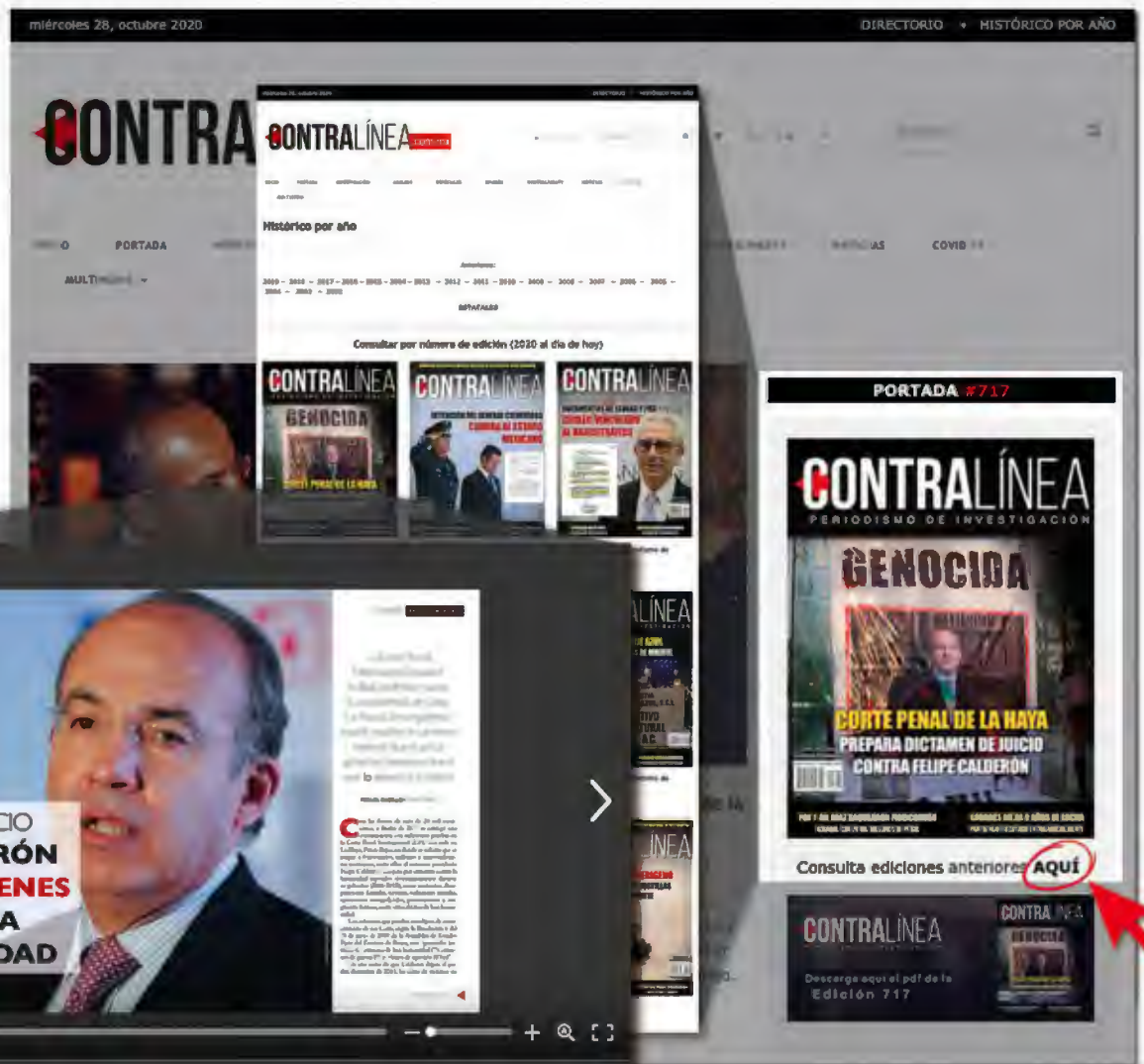
VISITA LA EDICIÓN IMPRESA DE LA REVISTA

CONTRALÍNEA

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

EN NUESTRA PÁGINA

www.contralinea.com.mx



DIRECTOR Miguel Badillo
oficiodepapel@yahoo.com.mx

COORDINADORES

INFORMACIÓN Y EDICIÓN WEB

Nancy Flores
nancy@contralinea.com.mx

EDICIÓN IMPRESA Zósimo Camacho
zosimo@contralinea.com.mx

CONTENIDO DIGITAL Héctor Badillo
hector@contralinea.com.mx

CONTRALÍNEA TV Érika Ramírez
esoemi@contralinea.com.mx

DISEÑO Miguel Minero
mimiga@contralinea.com.mx

PUBLICIDAD Martha Moreno
mmoreno@contralinea.com.mx

WEB Hugo Sadh

ILUSTRADOR David Manrique
manrique@contralinea.com.mx

► **OPINIÓN**

- 4 **RECUPERAR LA SOBERANÍA** Pablo Moctezuma Barragán
- 7 **EL ÍMPETU DEL PADRE PEDRO PANTOJA ARREOLA** Ilka Oliva Corado/Telesur
- 8 **EL DAÑO A LA NACIÓN Y LOS ABUSOS DE PODER DE CALDERÓN** Martín Esparza Flores
- 10 **TRAS LIDIAR CON LA PANDEMIA, CUBA SE APRESTA A REORDENAR LA ECONOMÍA** Luis Brizuela/Inter Press Service (IPS)
- 12 **CUANDO LAS GRANDES POTENCIAS PELEAN, EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU DESAPARECE** Thalif Deen/Inter Press Service (IPS)
- 15 **SAN SALVADOR SE VUELVE ESPONJA PARA AMORTIGUAR LOS DESLIZAMIENTOS** Edgardo Ayala/Inter Press Service (IPS)
- 16 **LA DEMOCRACIA PERUANA AFRONTA SU MAYOR DESAFÍO DESDE DICTADURA DE FUJIMORI** Gisselle Vila Benites y Anthony Bebbington/The Conversation-Inter Press Service (IPS)
- 18 **GIRO NEOLIBERAL, ¿EXITOSO PLAN EMPRESARIAL?** Juan J Paz-y-Miño Cepeda/Prensa Latina
- 20 **EL MUNDO EN 2021** Isabel Ortiz/Inter Press Service (IPS)

► **INVESTIGACIÓN**

- 22 **PORTADA** Consejería Jurídica de Presidencia frena dictamen que da pleno acceso al agua a indígenas de Oaxaca Érika Ramírez
- 30 **SEGURIDAD** Probable crecimiento de violencia en 2021 José Réyez

► **ANÁLISIS**

- 38 **INTERNACIONAL** La carrera por la vacuna anti-Covid-19 y el nuevo orden mundial postpandemia Jorge Retana Yarto
- 46 **INTERNACIONAL** Biden en América Latina: cambios y continuidades Silvina Romano, Aníbal García Fernández, Tamara Lajtmán y Arantxa Tirado/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
- 54 **INTERNACIONAL** La guerra, más letal que la pandemia de Covid-19 John Pilger/Counterpunch-Rebeión
- 60 **SOCIAL** La violencia en línea daña profundamente a las mujeres periodistas Julie Posetti/Red Internacional de Periodistas-Inter Press Service (IPS)



Imagen de portada: 123RF

CONTRALÍNEA. PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN—año 19, número 727, del 4 al 10 de enero de 2021—es una publicación semanal editada por Difusión de Información, S.A. de CV; Ruiseñor 11-2, El Rosedal, Coyoacán, CP 04330, Ciudad de México; teléfono: 55 54 91 94; www.contralinea.com.mx, info@contralinea.com.mx. Editor responsable: Agustín Miguel Badillo Cruz. Número de reserva al título de derecho de autor: 04-2001-1-1206164804-00-102. Número de certificación de folio de título: 12264, y de contenidos: 8918. ISSN: 1665-1626. Impresa por Difusión de Información S.A. de CV, Insurgentes Centro 98, colonia Tabacalera, Ciudad de México, teléfono 55549191. Este número

se terminó de imprimir el 1 de enero de 2021. Distribuida por la Unión de Veedadores de México, despacho de Gloria Santillán, Ignacio Mariscal 44, col. Tabacalera, CP 06030, México, DF, teléfono 55 92 08 91. CONTRALÍNEA reconoce el deber de veracidad y la cláusula de conciencia de reporteros y articulistas. Los textos son responsabilidad de sus autores. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos o imágenes de la publicación sin previa autorización de Difusión de Información S.A. de CV.

REDACCIÓN 5554-9194 • PUBLICIDAD 5554-9191
Ruiseñor 11-2, colonia El Rosedal, alcaldía de Coyoacán,
CP 04330, México, DF



Circulación certificada por Romay Hermida y Cía, SC,
folio: 00010-RHY



RECUPERAR LA SOBERANÍA

PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN, DOCTOR EN ESTUDIOS URBANOS, POLITÓLOGO, HISTORIADOR Y MILITANTE SOCIAL

Tenemos la necesidad de recuperar la Soberanía. Recuperarla desde que, en 1923, Álvaro Obregón firmó los Tratados de Bucareli con Estados Unidos con el fin de obtener el reconocimiento a su gobierno. Ahí también se comprometió a pagar supuestas deudas descomunales que sumaban 1 mil 400 millones de dólares. Cabe mencionar que la dictadura de Porfirio Díaz la había dejado en 400 millones. También en secreto se comprometió en asesinar a Pancho Villa y, en lo tocante a la industria, no producir motores, aviones, automóviles, etcétera. Ahí se comprometió la soberanía industrial.

Lázaro Cárdenas fue el primero en dar un gran paso a la soberanía industrial al expropiar el petróleo y levantar la industria petrolera apoyándonos en nuestras propias fuerzas, en los técnicos y obreros mexicanos, en nuestro propio desarrollo tecnológico y fuimos capaces de levantar la más grande industria de América Latina. Posteriormente tuvimos la capacidad de desarrollar la autosuficiencia en gasolina y en productos petroquímicos. Levantamos seis plantas petroquímicas. En la década de 1960 se expropió la industria eléctrica y tuvimos la posibilidad de desarrollarla nosotros mismos, con nuestra capacidad industrial.

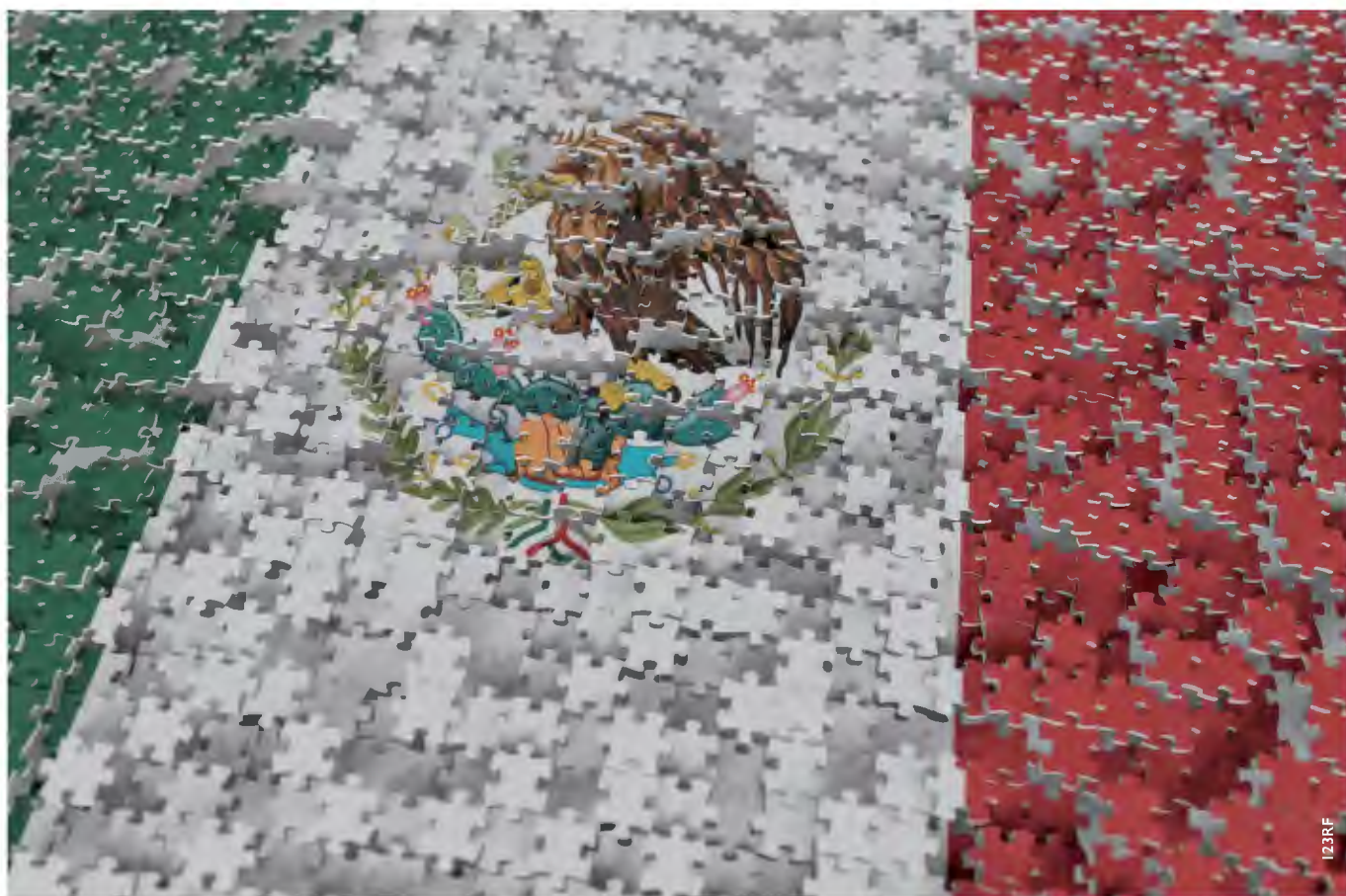
Posteriormente en la década de 1970, además de ser autosuficientes en productos agrícolas, ya producíamos trenes, automóviles, barcos, carros del Sistema de Transporte Colectivo Metro y se desarrolló la industria pesada, en gran parte en manos del Estado. Pero en 1976, luego del endeudamiento del gobierno de López Mateos que la dejó en 1 mil 700 millones de dólares, Díaz Ordaz en 3 mil 600, Luis Echeverría la disparó a 19 mil millones y fue cuando entró el Fondo Monetario Internacional (FMI) a controlar nuestra política económica y

a imponer las primeras políticas neoliberales que llevarían al desmantelamiento de nuestra soberanía económica.

La privatización de las empresas públicas, la apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio de Salinas le dieron la puntilla a la soberanía económica, tanto la industrial como la agrícola. También perdió la soberanía financiera, hoy más que en el porfiriato. Los activos bancarios, en muy grande medida, están en manos extranjeras.

Lo peor es que incluso se perdió la soberanía territorial al firmarse, en 2005 por parte del gobierno panista de Fox, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que llevó a la integración en seguridad, es decir, militar y policiaca y energética. Con ello, la integración al Comando Norte, la Iniciativa Mérida, las acciones abiertas de todas las agencias gringas en México: FBI, CIA, AFT, DEA y la construcción abierta de una base militar-policia en San Salvador Chachapa, en Puebla, hasta bases secretas. Luego con Peña la puntilla fueron las “Reformas Estratégicas” y en primer lugar la privatización del petróleo.

Así se avanzó hacia la integración de México a *Estados Unidos de las Corporaciones de Norteamérica*. Una forma moderna de anexión. Y además se justifica diciendo que “estamos en la región norteamericana” y debemos integrarnos. Porque el mundo se está dividiendo en regiones: la China, la Rusa, la Norteamericana y a nosotros nos toca pertenecer a la región norteamericana. ¿Y la soberanía nacional? geográficamente estamos en América, aunque siempre nos hemos considerado Latinoamericanos. Fue con Salinas y todos los presidentes del PRI y el PAN neoliberales que dejaron de decir que México era Latinoamericano para considerarlo “Norteamericano”.



Se puede decir que estamos al norte de Latinoamérica, o al centro de América, pero decir que los “Norteamericanos” somos Canadá, Estados Unidos y México tiene un solo objetivo político y económico: imponer a nuestro país ser los sometidos del sur; los modernos esclavos del sur:

Estados Unidos inició su auge capitalista gracias al trabajo esclavo del sur. Ahora en su decadencia quiere tener otros esclavos, los modernos esclavos de México. Y buscan nuestra economía no soberana sino “integrada” a las “cadenas de producción” de Norteamérica, donde como siempre nosotros somos la mano de obra de los migrantes sin derechos y la barata de México, los maquiladores, los que aportamos materia prima, los que consumimos sus productos —alentando el consumismo sin freno— y los que entregamos nuestra agua, nuestro suelo y subsuelo a la explotación de las corporaciones a través de la agroindustria que usa transgénicos, glifosato, a través del *fracking* y de la explotación de

nuestras minas. Además nos tienen endeudados como a los peones del porfiriato para que trabajemos sin descanso para los nuevos amos.

Ante la crisis actual, sanitaria y económica provocada por la Covid-19 es necesario un programa de solución urgente de necesidades que amplíe los esfuerzos del gobierno federal. La emergencia obliga la suspensión del pago del servicio de la deuda que suma 724 mil millones de pesos el año 2021 y dedicarlo a contratar personal médico y sanitario, invertir en laboratorios para producción de vacunas y medicamentos y la ampliación de la red de clínicas y hospitales, poniendo énfasis en la medicina preventiva y la atención desde lo local.

A su vez es urgente la generación de empleos. En el sector salud, brigadas comunitarias, en la agricultura para la soberanía alimentaria y la autosuficiencia en maíz, en el transporte y abasto directo del productor al consumidor, en la dotación de agua, protección civil para evitar o enfrentar desastres, en

obra pública comunitaria: viviendas, caminos. En la educación, la generación de una red de internet gratuita y redes sociales propias. En cooperativas, micro y mediana empresa. Programas de concientización en salud y nutrición y contra la violencia hacia la mujer, así como empleos en el desarrollo de arte y cultura, ciencia y tecnología. Son muchas las prioridades urgentes en lo inmediato, que los acreedores entiendan. Tras la suspensión de pagos, debe realizarse una auditoría, una renegociación y obtener quitas importantes.

El actual modelo antinacional ha sido desarrollado por un sistema político —el sistema de partidos— y el sistema “representativo” para darle un manto “democrático” a las decisiones que sólo favorecen a la oligarquía financiera en contra de la soberanía.

Hoy es hora de asumir la soberanía y conquistar plena soberanía. Soberanía Nacional y Popular. Soberanía Económica, Política y Cultural. Soberanía local y regional. Soberanía personal con responsabilidad social. Lo que sigue del Siglo XXI es la lucha por la liberación nacional y social.

El que el pueblo asuma su soberanía, implica una profunda transformación cultural. Se necesita apoyarnos en nuestra identidad profunda y la memoria histórica para comprender que es posible conquistar un futuro con rasgos nuevos que recojan todo lo positivo de nuestra lucha histórica secular, de nuestra profunda fuerza como pueblo trabajador, pueblo creativo y capaz y pueblo mágico. En nuestra cultura está nuestra fuerza. Por eso intentan americanizarnos y mantenernos sujetos a la mentalidad colonial y semicolonial.

México es un país grande, cuatro veces más grande que España, tenemos 130 millones de habitantes aquí y 55 millones en Estados Unidos, Somos (hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo reconoce) uno de los cinco pueblos más trabajadores del mundo. Contamos con muchos recursos, 11 mil kilómetros de litorales y salida a los dos océanos, con la mayor diversidad de fauna y flora. Contamos con todos los climas, tenemos todo para salir adelante. Hace falta

desarrollar una nueva cultura, la de un pueblo que sabe que sí puede, vencedor, que sabe apoyarse en sus propios pies. Una cultura que recoja lo mejor de nosotros mismos, para tener la autoestima suficiente para enfrentar los más grandes desafíos.

Esto ya lo sabe el inconsciente colectivo, falta hacerlo consciente. Nos tocó de vecina la potencia más fuerte que jamás ha tenido la humanidad con uno de los aparatos de guerra más grandes de la historia y una tradición agresiva de invasiones y despojos. Pero no hay fuerza en el mundo capaz de someter a un pueblo cuando está unido y organizado.

Por eso también tenemos que lograr la cultura de la unidad, de poner por encima de la lucha por la soberanía, todas nuestras diferencias. Unirnos por encima de edades, sexos, preferencias sexuales, origen nacional, color de piel, estilo de vida, ideología, creencia religiosa, partidos políticos. Porque la fuerza de millones nos hará invencibles. Organizándonos en cada municipio, pueblo, barrio,

ejido, unidad habitacional, integrando nuestras comunidades podemos asumir la soberanía y desarrollar una nueva cultura en el siglo XXI que inaugure una nueva y mejor etapa de Mé-

“El vigente modelo antinacional es fruto de un sistema político que sólo es “democrático” de nombre. Está diseñado para favorecer a las oligarquías”

xico. Todo lo lograremos con una transformación cultural que lleva a la transformación política, a la económica y a la social. El pueblo, para desarrollar su poder, tiene entre sus fuerzas más formidables la cultura, una cultura soberana, independiente y antimperialista desde la raíz.

Nuestra cultura es una de las más importantes del mundo. Es una de las cinco culturas originarias. Las más antiguas del mundo que son Mesopotamia, el valle Indo, China, la Andina y la del Anáhuac. Desde hace milenios desarrollamos nuestro arte y cultura: la pintura y los grandes murales, que se hicieron tan famosos en el siglo XX, arquitectura, ingeniería, urbanismo, el manejo del agua, la medicina, la poesía, la cultura de respeto a la naturaleza que generó la más amplia variedad de flora y fauna. Es hora hoy de apoyarnos en nuestras propias fuerzas para salir adelante rompiendo la dependencia y subordinación a la que nos ha sometido el colonialismo y el neocolonialismo. ◀

EL ÍMPETU DEL PADRE

PEDRO PANTOJA ARREOLA

ILKA OLIVA CORADO, ESCRITORA Y POETISA/TELESUR



O riundo de Durango, el padre Pedro Pantoja Arreola nació en El Ejido San Pedro del Gallo; un sacerdote que formó parte de la corriente católica de la Teología de la Liberación. Fundador de la Casa del Migrante de Saltillo, el padre Pedro, como era conocido por la comunidad migrante por obreros y campesinos, fue más allá del ritual de la sotana y la investidura sacerdotal. Se entregó a la lucha por la defensa de los derechos humanos de los más explotados del sistema sin detenerse a pensar en nacionalidades, colores de piel o credos; acción que muchas veces puso su vida en riesgo.

Un “mil usos” en los asuntos de la defensa de derechos humanos. Así como oficiaba misa, iba a visitar enfermos a los hospitales, visitaba las cárceles, participaba en conferencias sobre derechos humanos, denunciaba injusticias ante la ley y brindaba refugio físico y espiritual en la Casa del Migrante a los miles de indocumentados que cruzan México en su búsqueda de sustento en Estados Unidos. De la misma forma buscaba apoyo económico con empresarios, comerciantes y con cualquiera que quisiera brindar ayuda a personas en necesidad. Colaborador puntual en la Caravana de Madres Centroamericanas, que llegan anualmente a México en búsqueda de sus hijos migrantes desaparecidos.

Se enfrentó al sistema de justicia en su país al denunciar a policías que abusaban de los migrantes. En medio de la sonada guerra contra el narcotráfico, (gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) fue el primero en hablar sobre la forma en que el crimen organizado utiliza a los migrantes como carne de cañón, pero

también de cómo desde las instituciones de gobierno (Instituto Nacional de Migración, policía y Ejército) existen nexos con bandas criminales que secuestran, violan, asesinan y desaparecen a migrantes.

El narcotráfico le ofreció dinero, pero él lo rechazó, cosa que puso su vida en peligro en más de una ocasión. En su hoja de vida se puede mencionar que estudió Ciencias Sociales y un posgrado. Estudió en universidades de México, Estados Unidos, en la Universidad de Nanterre en París, entre otras. Cuenta con varios reconocimientos, en los que se pueden mencionar el Premio por la Igualdad y la No discriminación 2014, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); el Premio Internacional de Derechos Humanos Letelier-Moffitt del Institute for Policy Studies en Washington; la Presea Alfonso García Robles, de la Universidad Autónoma de México.

Pero así, premiado y todo, cargaba costales de frijol, verduras, huevos, fruta lo que fuera, para poder darles de comer a los migrantes indocumentados que llegaban a la Casa del Migrante. El padre Pedro fue en 1962 a la pesca de uvas a California, al campamento de César Chávez. Estuvo ahí 6 meses peleando en el proyecto Chicano Bracero. Por esos años también apoyó las luchas de las familias de mineros en Barroterán. Su trabajo en pro de los más golpeados del sistema se forja a lo largo de su vida.

El padre Pedro falleció por Covid-19 el 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante. Por cuestiones de protocolo sanitario, no tuvo velación. Fue cremado inmediatamente. Contaba con 76 años de edad. ◀



EL DAÑO A LA NACIÓN Y LOS ABUSOS DE PODER DE CALDERÓN

MARTÍN ESPARZA FLORES, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS/CUARTA Y ÚLTIMA PARTE

Insolente y con la mayor prepotencia, el secretario del Trabajo en el *narcogobierno* de Calderón, Javier Lozano, declaró a los medios el 13 de octubre del 2009: “Si se hubiera tenido la toma de nota en ese momento, el señor Martín Esparza en nada cambiaría la situación económica de Luz y Fuerza del Centro, las consideraciones sobre su viabilidad financiera operativa, estaríamos hablando de lo mismo: la extinción de un organismo [es decir, Luz y Fuerza del Centro, LFC] y de un sindicato [es decir, es decir, el Sinndicato Mexicano de Electricistas, SME]”.

Con anticipación al golpe de Estado contra el SME, Lozano Alarcón había negado la toma de nota

a la dirigencia legalmente electa meses atrás, previendo que si algo salía mal en la sucia estrategia diseñada desde los Pinos para desaparecer al SME y LFC, se dejaría a los electricistas sin su derecho a tener una representación legal.

Las palabras del sátrapa exfuncionario reafirman la determinación tomada de manera privada por Felipe Calderón Hinojosa y sus secuaces, para violar todas las leyes y pisotear el estado de derecho. Lo expresado por Lozano y otros exsecretarios, forma parte de la cadena de hechos descritos y enumerados en la denuncia presentada por la actual dirigencia smeita a la Fiscalía General de la República (FGR), y radicada en

la carpeta de investigación FED/FECC-CD-MX/0000536/2020, con el folio 5551, que son el hilo conductor para determinar las responsabilidades legales del fallido gobierno, por los innumerables abusos e irregularidades cometidas en un torcido ejercicio del poder.

Con lo citado de propia voz por Calderón Hinojosa en su libro: *Decisiones difíciles*, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el Ministerio Público Federal, tienen los elementos suficientes para determinar los delitos cometidos por su gobierno,

cuyas atribuciones se extralimitaron más allá de las conferidas por la Constitución, violando de manera flagrante la división de poderes.

A la distancia, se puede establecer que

“Cerró una empresa pública y despidió a 44 mil trabajadores. No hubo beneficio alguno para los 6 millones de usuarios. Fue un saqueo a la nación”

tanto Calderón y sus secretarios de Estado carecían de las facultades legales para decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro pues tal atribución era competencia del Congreso de la Unión. Como señalamos en entregas anteriores, de manera sospechosa los diputados no sólo del Partido Acción Nacional (PAN) sino del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros partidos satélites se negaron a determinar sobre la inconstitucionalidad de la medida, a cambio de recibir jugosos apoyos presupuestales para sus gobernadores y prebendas partidistas.

Pero ésta sólo fue una de las tantas facetas de corrupción y complicidad que permitieron uno

de los mayores atropellos jurídicos y laborales de que se tenga memoria en el país, pues en este contexto resulta lamentable que el máximo órgano de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se haya prestado a ser comparsa de un gobierno que lejos de defender las leyes y devolver la paz y la tranquilidad al país, lo sumió en un baño de sangre y una maraña de contradicciones, por ejemplo, en el fallido postulado de crear 1 millón de empleos anuales, cuando de un plumazo el narcopresidente lanzó a la calle a 44 mil electricistas y a otros tantos miles más, como los trabajadores de Mexicana de Aviación, a lo largo de su sexenio.

En la demanda presentada por el SME, se detalla cómo las autoridades actuaron de manera facciosa al tratar de dejar sin defensa jurídica a los trabajadores que se negaron a liquidarse y optaron la lucha de resistencia. El 30 de agosto del 2010, por ejemplo, a Junta Especial Número Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, resolvió que las relaciones individuales y colectivas de trabajo del SME con LFC, se daban por terminadas por caso fortuito o causa de fuerza mayor.

El SME recurrió el 9 de febrero del 2011, a un amparo contra el laudo de la Junta ante el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó el ejercicio de la facultad de atracción a la SCJN, pero el 4 de mayo de ese año, la Corte negó tal la facultad de atracción, en virtud de que no “había aspectos de interpretación directa a preceptos constitucionales”.

Pero este criterio de la Corte sufriría un cambio tras de que el referido Colegiado resolvió el 13 de septiembre del 2012 la ilegalidad del fallo de la Junta Federal al reconocer en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la figura del patrón sustituto de la extinta LFC, echando atrás el absurdo argumento del caso fortuito o fuerza mayor, empleado para dar por terminadas las relaciones laborales.

Calderón difícilmente podría explicar al país por qué, lejos de acatar esta sentencia que devolvía su empleo a los electricistas en resistencia, se negó a acatarla e instruyó a la PGR a solicitar

nuevamente a la Corte su facultad de atracción para conocer del caso que de forma por demás sospechosa, fue aceptada por los ministros, contradiciendo sus criterios empleados con anterioridad.

El 30 de enero del 2013, en uno de los episodios más deshonrosos para el alto tribunal, la ministra Margarita Luna Ramos se *sacó de la manga* documentos que no obraban en autos para sostener que no existía un patrón sustituto, dándoles valor probatorio con la intención de echar abajo la sentencia del tribunal colegiado.

Por eso, dentro de la lista de funcionarios tanto del poder Ejecutivo como Judicial a ser investigados por el arbitrario cierre de LyFC y el atentado a los derechos laborales y jurídicos del SME, los entonces integrantes de la Corte, tiene que responder por su dudoso proceder que fue y sigue siendo calificado como un verdadero atentado al Estado de Derecho.

En lo que respecta al operativo policiaco militar en donde como comandante de las Fuerzas Armadas al dipsómano expresidente no le importó exceder sus facultades para movilizar a miles de elementos, sólo previsto en emergencia nacional o tiempos de guerra, su responsabilidad es por demás evidente.

Lo mismo que la de su entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy procesado en las cortes americanas por sus nexos con el crimen organizado y que gastó cientos de millones del presupuesto no para apaciguar al país sino para proteger a los barones de los cárteles. Los ríos se sangre vertidos por todo el territorio nacional sin resultados tangibles, hablan del peor fracaso en materia de seguridad de que se tenga memoria.

Con lo expuesto en esta serie de artículos, la nación podrá normar su criterio tras conocer todas las irregularidades cometidas en el cierre de una empresa pública y el despido de 44 mil electricistas, que al final de cuentas no reportó beneficio alguno a los 6 millones de usuarios de la zona centro, tampoco a las finanzas públicas y menos al sector energético del país. La FGR tiene la palabra para castigar a los culpables y recobrar el estado de derecho. Esperemos que así sea. ◀



TRAS LIDIAR CON LA PANDEMIA CUBA SE APRESTA A REORDENAR LA ECONOMÍA

LUIS BRIZUELA/INTER PRESS SERVICE (IPS)

La Habana, Cuba. Cuba despidió un año signado por los efectos de la pandemia de Covid, la profundización de la crisis económica y el empeoramiento de relaciones con Estados Unidos, mientras se alista para un desafiante reacomodo de su tejido socioeconómico desde el primer día de 2021.

“El coronavirus nos mantuvo encerrados en casa. Al detenerse muchas actividades económicas, también cayeron los ingresos. Largas filas durante horas para comprar alimentos cada vez más escasos y caros ha hecho de 2020 un año agobiante”, confesó a IPS vía telefónica Elsa Batista, quien gestiona una cafetería en la ciudad de Holguín, a 685 kilómetros al este de La Habana.

La crisis global por la enfermedad vino, en el caso de este país insular caribeño, a agravar debilidades económicas internas, relacionadas con la excesiva centralización de decisiones y falta de incentivos que influyen en un déficit de producciones e insumos para satisfacer las crecientes demandas del mercado interno y de exportación.

Datos oficiales evidencian que por segundo año consecutivo, la economía cubana decrece, esta vez 11 por ciento del producto interno bruto, debido fundamentalmente al impacto de la Covid, aunque para el año próximo se pronostica un avance positivo en este indicador de 6 a 7 por ciento.

Durante los últimos 12 meses se acrecentó la hostilidad de la administración del saliente mandatario estadounidense, Donald Trump, con drásticas medidas para impedir la llegada de combustibles a la isla y recortar sus principales fuentes de ingresos, sobre todo la prestación de servicios médicos, el turismo y las remesas.

El embargo que Washington mantiene contra

La Habana desde 1962 es considerado por las autoridades cubanas como el principal obstáculo para el desarrollo del país.

El presidente electo Joe Biden, quien tomará posesión el 20 de enero, planea revertir muchas de estas regulaciones, anticipó el 15 de diciembre el medio estadounidense Bloomberg.

La estrategia del demócrata incluiría reducir las restricciones a los viajes, la inversión y las remesas, las cuales se perciben como desproporcionadamente perjudiciales para estadounidenses y cubanos comunes, aunque mantendrá la presión sobre temas como los derechos humanos, citó el medio.

Asimismo, las afectaciones por intensas lluvias asociadas a fenómenos meteorológicos y escasez de fertilizantes mantienen bajos rendimientos agrícolas y pobres cosechas, a lo cual se suma el alza de los precios con un impacto directo en las mesas de cubanas y cubanos, situación que se mantendrá el próximo año, han reconocido directivos del Ministerio de la Agricultura.

Pese a ello, este país de 11.2 millones de habitantes sobresale por bajas tasas de incidencia de la Covid-19, con un total de 137 fallecidos y alrededor de 10 mil 200 contagios, desde que el 11 de marzo fueron reportados aquí los primeros tres casos.

Entre sus principales fortalezas, la isla cuenta con un sistema de salud pública universal y gratuito y personal altamente calificado, un plan de acción para lidiar con la enfermedad, y la posibilidad de conformar más de 50 brigadas médicas que ayudaron a combatir el virus en decenas de naciones.

Gracias a su potencial científico, Cuba dispone además de cuatro candidatos de vacunas contra la covid-19, con prometedores resultados en sus diferentes estadios de desarrollo y ensayos clínicos, y la

posible inmunización de la población cubana en el primer trimestre de 2021.

Según las autoridades, enfrentar la enfermedad ha costado al país 100 millones de dólares no planificados.

En este contexto, el gobierno cubano aprobó en julio un conjunto de políticas interrelacionadas y dirigidas a estimular el desarrollo local, la soberanía alimentaria y avanzar en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

Cuba importa alrededor de 80 por ciento de sus alimentos, equivalentes a un desembolso anual de 2 mil millones de dólares, por lo cual incentivar su producción nacional para aminorar importaciones resulta estratégico en dichos planes.

También en julio fue anunciada la Estrategia para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la Covid.

En dicha iniciativa se inserta el proceso de unificación monetaria y cambiaria pautado en los Lineamientos, el programa de reformas socioeconómicas aprobado en 2011 y actualizado en 2016, dirigido a modernizar el modelo socialista de desarrollo.

Dese el primero día de este 2021 sólo tiene curso legal el peso cubano (CUP) con una tasa de cambio de 24 unidades por dólar y el establecimiento del salario mínimo mensual en 2 mil 100 pesos (87.5 dólares).

Con la desaparición del peso cubano convertible (CUC), hasta ahora equivalente al dólar, cerrará un ciclo de 27 años conviviendo con dos monedas, lo cual ha subvertido lógicas comerciales y financieras con negativos efectos sociales y políticos.

Al unísono también se devaluará el CUP, se incrementarán los precios mayoristas y minoristas, quedarán eliminados un conjunto de subsidios y aumentarán salarios y pensiones, procesos de alta complejidad y riesgosos impactos en las empresas estatales, las cooperativas, el sector privado y la ciudadanía, aseguran analistas.

Para el periodista cubano especializado en temas económicos Ariel Terrero, el ordenamiento monetario revelará quiénes son rentables y en qué medida, mientras las autoridades conocerán mejor las fuerzas, debilidades y fugas de la economía, y serán más atinadas las decisiones para invertir en un sector u otro.

El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez, explicó a IPS que ante el pronóstico de déficit fiscal de 18 por ciento, por encima de lo recomendado, “se han de apresurar las ventas a la ciudadanía, a fin de reducir la deuda pública (más de 26 mil 350 millones de pesos), que será sustentada por un incremento de los impuestos, así como de precios en los alimentos y servicios básicos en CUP”.

“Se requiere incrementar la oferta de bienes y servicios de manera acelerada, lo cual constituye la vía más efectiva para mantener la inflación controlada y que los beneficios esperados del ordenamiento, no se anulen”, comentó a IPS la economista cubana Betsy Anaya.

Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, aseguró que el gobierno concibió 44 indicadores para medir si la unificación monetaria responde según lo previsto.

Uno de ellos son las expectativas de la población con respecto al mejoramiento de la capacidad de compra, sobre la base del salario real, precisó Murillo al intervenir el 16 de diciembre ante la sesión del unicameral parlamento cubano.

En la esfera política, expertos consultados por IPS coinciden en que el mayor reto de las autoridades cubanas es construir nuevos consensos sociales a partir de lo dispuesto en la Constitución vigente desde abril de 2019, la cual amplió el reconocimiento de derechos humanos que, no obstante, deben llevarse a la práctica.

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y el no gubernamental y ecuménico Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr, con sede en La Habana, emitieron sendas declaraciones, los días 12 y 15, respectivamente, donde coinciden en la necesidad del diálogo para dirimir puntos de fricción cada vez más visibles.

Durante las últimas semanas autoridades y medios de prensa oficiales han acusado a la administración Trump de usar las dificultades internas para atizar tensiones, a fin de promover un estallido social.

A la par, jóvenes escritores y artistas, así como académicos, intelectuales y otras voces civiles, consideran insoslayable avanzar en una conciliación interna, sin injerencias foráneas, sobre asuntos como la libertad de expresión, la censura, los espacios para los artistas y el arte independiente y el amparo de las garantías constitucionales, entre otros. ◀



CUANDO LAS GRANDES POTENCIAS PELEAN

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU DESAPARECE

THALIF DEEN/INTER PRESS SERVICE (IPS)

Nueva York, Estados Unidos. En el apogeo de la Guerra Fría en la década de 1960, el diplomático peruano Víctor Andrés Belaúnde caracterizó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una institución políticamente tambaleante que sobrevive sólo por voluntad y gusto de las cinco grandes potencias.

Simplificando su argumento, dijo: “Cuando dos pequeñas potencias tienen una disputa, la disputa desaparece. Cuando una gran potencia y una pequeña potencia están en conflicto, la pequeña potencia desaparece. Y cuando dos grandes potencias tienen una disputa, las Naciones Unidas desaparecen”.

Y, más apropiadamente, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) el que se desvanece y cae en el olvido, particularmente cuando las grandes potencias chocan, lo que justifica un alto el fuego, no en algún conflicto militar distante, sino dentro de la propia sala del directorio de la ONU.

El único organismo internacional con la responsabilidad principal de mantener la paz y la seguridad mundial, el CSNU a menudo ha permanecido en un estado cercano a la parálisis, particularmente cuando los cinco miembros con poder de veto deciden proteger sus intereses nacionales o los de sus aliados políticos y militares o sus Estados satélites.

Entre los 15 países que componen el CSNU, los cinco permanentes y con poder de veto están

en una esquina Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y en la otra China y Rusia, en lo que en ocasiones parece un ring o directamente un campo de batalla.

Como señaló el diario *The New York Times* a fines de noviembre, el mundo ahora tiene que hacer frente a las nuevas realidades geopolíticas de una “Rusia agresiva” y una “China emergente” que seguirán reflejándose en la sala del Consejo de Seguridad.

En sus casi 75 años de existencia, uno de los mayores fracasos del CSNU es su incapacidad para poner fin a la ocupación de Israel de parte del territorio de Palestina o incluso de garantizar el cumplimiento de sus propias resoluciones.

El CSNU también ha permanecido congelado o no ha podido ayudar a resolver algunos de los conflictos militares e insurrecciones civiles en curso en todo el mundo, incluidos Siria, Yemen, Libia, Afganistán, Myanmar (Birmania), Hong Kong, Somalia, Sahara Occidental y, más recientemente, Etiopía, entre otros.

Stephen Zunes, profesor de política y coordinador de Estudios del Oriente Medio en la estadounidense Universidad de San Francisco, dice a IPS que quizás el mayor fracaso del Consejo de Seguridad ha sido su incapacidad de responder eficazmente a la expansión ilegal y por la fuerza de sus territorios de algunos de sus Estados miembros.

“Fue una agresión así por parte de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial



lo que llevó a la fundación de la ONU y a la prohibición categórica de tales invasiones en la Carta de la ONU”, recuerda este politólogo que es toda una autoridad en el CSNU.

Sin embargo, “Israel y Marruecos, protegidos por el poder de veto de sus aliados en el Consejo de Seguridad, continúan con la ocupación y colonización ilegal de territorios (Palestina y Sahara Occidental respectivamente) que tomaron por la fuerza”, advierte.

De manera similar, argumenta, Rusia se ha salido con la suya con la ocupación de Crimea.

El Consejo de Seguridad, señala Zunes, no pudo hacer cumplir sus resoluciones sobre la conquista de Timor Oriental por Indonesia y la ocupación continua de Namibia por el régimen de apartheid de Sudáfrica hasta que las campañas mundiales de la sociedad civil los obligaron a retirarse décadas después.

Si el CSNU ni siquiera puede evitar que

los Estados miembros invadan y ocupen otras naciones, algo que los fundadores de la ONU asumieron que garantizaría el organismo mundial, se convierte en un anacronismo histórico. “¿Cómo se puede esperar entonces que aborde problemas más complejos?”, se pregunta.

Mientras tanto, después de más de 20 años de negociaciones fallidas, el actual presidente de la Asamblea General de la ONU, el turco Volkan Bozkir, está haciendo un nuevo intento para reformar el CSNU, incluida la ampliación del número de sus miembros actuales y de los cinco permanentes.

A dos embajadoras, la polaca Joanna Wrońska y la catari Alya Ahmed Saif Al-Thani, se las designó como copresidentas de las estancadas Negociaciones Intergubernamentales sobre la reforma del CSNU.

Sobre la rivalidad entre las grandes potencias y la protección de sus Estados satélites, como re-

currente factor del estancamiento del CSNU, Zunes comenta que Estados Unidos se enorgullece del principio de la aplicabilidad universal de la legislación nacional.

Sin embargo, en lo que respecta al derecho internacional, Estados Unidos ha presionado a las Naciones Unidas para que usen la fuerza o impongan duras sanciones a las naciones adversarias en el área de la proliferación de armas, el apoyo al terrorismo y la conquista de los Estados vecinos.

Ello al mismo tiempo que bloquea a la ONU para que no tome ninguna acción efectiva contra aliados que son culpables de los mismos delitos.

Mientras, Zunes señaló que Estados Unidos y Rusia han abusado de su poder de veto para proteger a Israel y Siria, respectivamente, de su responsabilidad por violaciones importantes del derecho internacional humanitario.

En última instancia, el fracaso no es del sistema de las Naciones Unidas, considera el experto, para quien el fracaso es el de Estados Unidos y otras potencias, que no están a la altura sobre su papel como miembros especiales del CSNU de hacer cumplir la Carta y los estatutos legales internacionales del propio directorio de la ONU.

Para el también columnista sénior de las publicaciones sobre relaciones internacionales *Foreign Policy* y *Focus*, ese fracaso obedece a que en los cinco países con derecho al veto se imponen sus estrechos intereses geopolíticos sobre los valores universales de la ONU.

Bozkir, el presidente de la Asamblea General, dijo en noviembre que el nombramiento de las copresidentas debería permitir que los Estados miembros comiencen sus consultas y alentó a las delegaciones a considerar la posibilidad de iniciar las negociaciones intergubernamentales a principios de 2021 y aumentar las reuniones sobre el tema de la reforma del CSNU.

Para el diplomático turco, el diálogo entre los Estados miembros es la forma más eficaz de hacer avanzar este proceso y que la composición y los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad

pasen a reflejar las realidades del siglo XXI.

Brenden Varma, portavoz del presidente de la Asamblea General, dijo a los periodistas que este espera que con la participación de los Estados miembros y enfoques pragmáticos “podamos lograr un progreso significativo en este difícil tema”. “El presidente se comprometió a apoyar este proceso de manera imparcial, objetiva y con mente abierta”, añadió.

En cuanto a la cuestión de la representación equitativa y el aumento del número de miembros del Consejo de Seguridad, unos 113 Estados miembros (de los 122 que presentaron sus posiciones en un documento marco) apoyan la expansión en las dos categorías existentes.

Actualmente, los 10 miembros no permanentes del CSNU son elegidos por términos de 2 años, sobre la base de la rotación geográfica.

Los candidatos potenciales para adquirir la membresía permanente son India, Japón y Alemania, además de Sudáfrica o Nigeria (por África) y Brasil o Argentina (en América Latina).

Pero es más que improbable que los nuevos miembros perma-

nentes tengan poder de veto, un privilegio que ejercerían solo los P5, como su “derecho legítimo de nacimiento”.

La parálisis de la ampliación y la oposición implícita de las potencias actuales miembros permanentes hacen dudar sobre la posibilidad de cambios significativos tanto en la composición como en el funcionamiento del CSNU.

Zunes, de hecho, consideró la negociación de la reforma como otro ejercicio de futilidad política. “No hay ninguna posibilidad seria de que el P5 permita que estas reformas se lleven a cabo en el corto plazo”, sentenció.

Sin embargo, sí consideró importante llamar la atención repetidamente sobre la naturaleza antidemocrática y poco representativa del Consejo de Seguridad. A su juicio, eso ayuda a movilizar a los gobiernos y a la sociedad civil de todos los continentes para que presionen a favor de que las Naciones Unidas estén a la altura de su misión. ◀

“No hay posibilidad alguna de que las cinco potencias que integran el Consejo de Seguridad de la ONU acepten cambios significativos en el sistema”

SAN SALVADOR SE VUELVE ESPONJA PARA AMORTIGUAR LOS DESLIZAMIENTOS

EDGARDO AYALA/INTER PRESS SERVICE (IPS)



San Salvador, El Salvador. San Salvador ha debido enfrentar, a lo largo de su historia, el peligro de deslizamientos de tierra, lodo y rocas que han bajado de las laderas del volcán a cuyos pies fue fundada en 1525.

En esas laderas, inclinadas en extremo, no se logra infiltrar toda el agua de lluvia y esta, como en un efecto de bola de nieve, va desprendiendo tramos de tierra hasta producir aluviones que ya han causado muerte y destrucción en la capital de El Salvador y en sus ciudades aledañas.

En septiembre de 1982, uno de esos deslizamientos causó 500 muertos en el complejo residencial Montebello, al noroeste de la capital.

El más reciente ocurrió el 29 de octubre, cuando un derrumbe originado en la cima del volcán sepultó varias viviendas en comunidades pobres ubicadas en las cercanías de Nejapa, al norte de San Salvador. Nueve personas murieron en esa oportunidad.

Debido al peligro latente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ejecuta, junto a organizaciones locales, el proyecto City Adapt en las laderas de ese macizo de 1893 metros sobre el nivel del mar.

Se busca reducir la vulnerabilidad en la zona, incrementada por el efecto del cambio climático,

con lluvias más intensas y frecuentes.

Unas 29 fincas forman parte del proyecto, mediante el cual ejecutan medidas para mejorar la infiltración y evitar la erosión en esas tierras, con barreras vivas y muertas, zanjas de infiltración cavadas entre los cafetales y pozos de captación que colectan el exceso de agua lluvia.

Todo ese exceso de agua suele producir, además de deslizamientos, inundaciones en la zona sur de San Salvador, una ciudad en donde viven, en conjunto con su área metropolitana, 1.8 millones de personas, equivalentes a 27 por ciento de los 6.7 millones de habitantes de este pequeño país

centroamericano.

En total, las 29 fincas representan 423 hectáreas de terrenos intervenidos, y se tiene previsto la restauración de 1 mil 150 hectáreas de bosques y plantaciones de café, por eso el PNUMA habla de convertir San Salvador en una ciudad esponja.

Se calcula que el proyecto City Adapt ya ha reducido el riesgo de inundaciones para unas 16 mil personas y se espera que en 2022 sean 115 mil.

Iniciativas para convertir en ciudades esponja a urbes vulnerables se ejecutan también dentro de América Latina y el Caribe en Xalapa, en México, y en Kingston, Jamaica. ◀

“Un solo deslizamiento de tierra causó la muerte de 500 personas. Estos fenómenos, comunes en San Salvador, son ahora combatidos por la ONU”



LA DEMOCRACIA PERUANA AFRONTA SU MAYOR DESAFÍO DESDE DICTADURA DE FUJIMORI

GISSELLE VILA BENITES, INVESTIGADORA ADJUNTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE MINERÍA Y SUSTENTABILIDAD DE LA PERUANA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO/**ANTHONY BEBBINGTON**, PROFESOR DE AMBIENTE Y SOCIEDAD DE LA ESTADUNIDENSE UNIVERSIDAD DE CLARK/THE CONVERSATION-INTER PRESS SERVICE (IPS)

Lima, Perú. El nuevo presidente interino de Perú asumió el cargo el 17 de noviembre en circunstancias poco envidiables. Francisco Sagasti se convirtió en el tercer presidente del país sudamericano en una semana, después de que el presidente Martín Vizcarra fuera vacado por “incapacidad moral”, lo que muchos peruanos calificaron como un golpe de Estado por parte del Congreso.

Luego, el sucesor de Vizcarra, el presidente del Congreso Manuel Merino, se vio rápidamente obligado a dimitir tras una furiosa protesta pública.

Sagasti ahora debe conducir a una nación sacudida no sólo hacia las elecciones, programadas para abril de 2021, sino también hacia la recuperación de la confianza en la democracia.

No es un mandato sin precedentes para un líder peruano. Hace exactamente 20 años los líderes políticos de Perú enfrentaron una prueba similar; luego de la caída del dictador Alberto Fujimori. Y finalmente fracasaron.

Y sus fracasos explican por qué Perú, en palabras del politólogo Alberto Vergara, se asomó al “abismo” del autoritarismo represivo durante 6 días en noviembre, con manifestantes enfrentando violencia indiscriminada y mortal, incluso secuestros, torturas, detenciones ilegales y abusos sexuales por parte de la policía peruana.

Grandes expectativas incumplidas

Durante el corrupto gobierno de Fujimori, respaldado por el Ejército, entre 1990 y 2000, las instituciones democráticas de Perú fueron desmanteladas y sus valores democráticos socavados. Los disidentes se

enfrentaron a la muerte, la desaparición y la tortura.

El régimen de Fujimori se derrumbó en noviembre de 2000 debido al fraude electoral y un levantamiento popular masivo. Fujimori fue destituido por el Congreso y reemplazado por el líder del Congreso Valentín Paniagua.

Como presidente interino, Paniagua tenía el mandato, como lo tiene Sagasti hoy, de llevar a una nación profundamente dañada hacia una transición democrática formal y ayudar a la sociedad a sanar. En 2001, Paniagua estableció una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, para documentar las atrocidades de Fujimori, y creó una comisión constitucional encargada de identificar los cambios estructurales necesarios para salvaguardar la democracia peruana en el futuro.

Los sucesores de Paniagua no supieron concretar sus iniciativas.

La Comisión de la Verdad documentó meticulosamente los crímenes de Estado y, en 2009, Fujimori fue condenado por abusos a los derechos humanos. Pero el enjuiciamiento de otras personas y la reparación de las víctimas, en particular las poblaciones pobres, rurales e indígenas, han sido demasiado lentos e inadecuados.

Los líderes de Perú después de Paniagua también descartaron los argumentos de que Perú necesitaba una nueva constitución con mayores protecciones para la democracia y el estado de derecho. La redacción de una nueva Constitución podría haber asegurado, como dijo el fallecido político peruano Henry Pease, que “[ningún] sinvergüenza está por encima de la constitución y en capacidad de eliminar el Parlamento,” como lo había hecho Fujimori.

En cambio, Alejandro Toledo, el primer presidente elegido democráticamente después de Fujimori, canalizó las demandas de reforma en el “Acuerdo Nacional” de 2002. Este documento, elaborado en conjunto por el gobierno, la sociedad civil y los partidos políticos, sentó las bases para la transición democrática del Perú y estableció una visión nacional compartida.

Pero hizo poco para abordar los problemas crónicos de gobernabilidad del Perú. Los controles sociales, ambientales y de rendición de cuentas sobre la inversión pública y privada siguieron siendo débiles. También los tribunales peruanos, que se han mantenido vulnerables a intereses especiales debido a un proceso de nombramiento judicial politizado y a menudo corrupto.

Crecimiento desigual

Las consecuencias de la falta de reforma de Perú se revelaron dramáticamente en los últimos años en el escándalo de corrupción Lava Jato, en el que empresas constructoras sobornaron a políticos de toda América Latina para conseguir grandes contratos gubernamentales.

Desde 2016, cuatro presidentes peruanos y la propia hija de Fujimori han sido implicados criminalmente en Lava Jato. Vizcarra, cuya vacancia (destitución) desencadenó la actual crisis política de Perú, se convirtió en vicepresidente debido a este escándalo. Llegó al poder en 2018 cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció tras acusaciones de soborno.

Pero cuando los legisladores derrocaron al presidente Vizcarra, con los mismos cargos en noviembre de 2020, provocó una condena pública inmediata. Los manifestantes sintieron que la interpretación de los legisladores de la “incapacidad moral”, una cláusula de la constitución peruana, era, en el mejor de los casos, dudosa. En el peor de los casos, temían, era una manipulación cínica por parte de los conservadores del Congreso para apoderarse del gobierno de Perú.

Cuando el sucesor de Vizcarra, Merino, nombró como su primer ministro al político Antero Flores-Araoz, aliado de la extrema derecha, esos temores parecieron confirmarse. Unos 2.7 millones de peruanos, casi una décima parte de la población, salieron a las calles. Merino dimitió después de 6 días, luego de no poder asegurar el apoyo de los militares.

Hoy, 85 por ciento de los peruanos, según el Latinobarómetro de la Universidad de Vanderbilt, coinciden en que el Perú “está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. El país pierde alrededor de 6 mil 500 millones de dólares por corrupción cada año.

Aun así, la economía de Perú ha experimentado un auge desde el año 2000, impulsada principalmente por la extracción de minerales, gas y cultivos como espárragos, uvas y aguacates. La minería representa alrededor de 60 por ciento de las exportaciones.

Si bien estas actividades se producen en áreas rurales, el campo de Perú sigue siendo extremadamente pobre. Una persona en Cajamarca, región rica en oro, tiene aproximadamente cinco veces más probabilidades de vivir en la pobreza que una de Lima metropolitana.

Los peruanos que protestan contra el daño ambiental y el desmantelamiento de los medios de vida causados por la minería, tanto legal como ilegal, a menudo se enfrentan a la violencia policial y de las fuerzas de seguridad.

Las protestas y las batallas legales por la minería en Perú no han recibido adecuada respuesta política. La supervisión de las operaciones mineras es tan débil que las fuerzas policiales y militares a veces firman acuerdos con empresas para proteger operaciones mineras de las protestas.

La tarea de Sagasti

Mejorar la inclusión política y económica y reformar la policía ocupan ahora un lugar destacado en la lista de demandas de los manifestantes.

Al igual que en 2000, algunos manifestantes y políticos están pidiendo nuevamente una nueva constitución que fortalezca la separación de poderes en Perú y haga que los funcionarios electos rindan cuentas de sus acciones.

En la década de 2000, el Congreso descuidó este tipo de cambios estructurales, permitiendo que los problemas que dieron origen al régimen de Fujimori continuaran después de su derrocamiento.

Hoy, los jóvenes y vigilantes manifestantes de Perú esperan que Sagasti haga más. Para tener éxito como líder postcrisis, necesitará restaurar la confianza de los peruanos en el gobierno y sentar las bases para un futuro más democrático. ◀



GIRO NEOLIBERAL ¿EXITOSO PLAN EMPRESARIAL?

JUAN J PAZ Y MIÑO CEPEDA, DOCTOR EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA POR LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA; COORDINADOR ACADÉMICO, EN ECUADOR, DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE/PRENSA LATINA

Los empresarios latinoamericanos del presente y sus organizaciones gremiales suelen asumir que son “a-políticos” e independientes. Consideran a sus actividades simplemente como “productivas”. Suponen que exclusivamente crean “riqueza” y trabajo, que de ellos depende la prosperidad ciudadana e incluso cumplen una misión ética y patriótica de amplio beneficio social.

Pero la historia económica de la región demuestra que los empresarios y sus gremios, sin ser partidos políticos activos, se convierten en actores directos en las contiendas electorales con candidatos vinculados a sus redes; son fuerzas sociales permanentemente activas en las confrontaciones por el poder; pasan a ser protagonistas centrales en las disputas por la hegemonía en el Estado y, normalmente, buscan la implantación de gobiernos afines a sus intereses.

Sin embargo, esas dinámicas empresariales son aún poco estudiadas en Ecuador, cuya experiencia es similar en otros países. Al coordinar las actividades del Taller de Historia Económica (THE) en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), logramos seguir los pronunciamientos de las cámaras de la producción en los periódicos nacionales entre 1979 y 2006.

Esos materiales permitieron comprobar que las cámaras empresariales fueron activos actores políticos durante todos esos años, en los cuales se opusieron a las políticas “estatistas”, cuestionaron o apoyaron gobiernos, convirtieron el neoliberalismo en su dogma ideológico —aunque entendido a su manera— y, en definitiva, buscaron que las políticas públicas les beneficiaran. El mismo comportamiento como actores políticos ha continuado bajo otros contextos, entre 2007 y el presente, como lo he destaca-

do en múltiples artículos sobre el tema.

Una investigación publicada en el exterior actualiza el tema de los empresarios con singular novedad. Se trata del artículo “Neoliberalism in Ecuador after Correa: a surprise turn or according to economic elite’s plan?” (2019 - <https://bit.ly/31fHN0G>), de Thomas Chiasson-LeBel, profesor visitante de la Universidad de California Santa Cruz.

Se pregunta el autor si el “giro económico neoliberal” que dio el gobierno de Lenín Moreno debería interpretarse como una verdadera “sorpresa”, pero concluye que al verlo de esa manera se descuida un asunto central: las élites empresariales no fueron “receptoras pasivas” de ese giro, sino que tuvieron una decidida acción estratégica desde años anteriores.

Sin duda, el autor reconoce que durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) la clase empresarial se sintió afectada por la nueva conducción del Estado, en la cual se cortó su anterior influencia y su capacidad de control de las políticas económicas. Además destaca los avances sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo durante ese período.

Pero los empresarios no se paralizaron. Si bien hubo un sector animado por confrontar al gobierno —incluso pensaron en la posibilidad de un golpe de Estado—, las cámaras empresariales adecuaron a las circunstancias sus propias acciones y estrategias: búsqueda de nuevos socios, permanente presencia en medios, promoción de tratados comerciales, vocería a través de figuras nuevas (como fue el caso de Richard Martínez, resaltado por el autor), o la exitosa movilización contra el anuncio del nuevo impuesto a las herencias, que logró inéditas adhesiones sociales (2015) y hasta la paralización de la propuesta.

He considerado ésta como la acción que marcó el triunfalismo de las cámaras frente al gobierno de Correa.

En el artículo de Chiasson-LeBel queda claro que las elites empresariales desconfiaron de la sucesión gubernamental con Moreno, pero enseguida encontraron condiciones favorables, con la incorporación de empresarios al gabinete, con los diálogos y la conformación del “Consejo Asesor de Producción”, y sobre todo con el nombramiento de Martínez como ministro de Economía y Finanzas (mayo 2018).

De otra parte, los principales grupos económicos supieron desarrollar estrategias innovadoras desde la época de Correa. Dice el autor que, aunque se usó la “autoproclamación exitosa” (como los vistosos casos de Álvaro Noboa y Guillermo Lasso), resultó de mayor incidencia la “competencia con la esfera pública”, pues se adoptaron mecanismos de responsabilidad social empresarial, se estrecharon vínculos con funcionarios, fue promovida la buena imagen corporativa, lograron identificarse con demandas sociales específicas (Corporación La Favorita ayudó frente al terremoto en Manabí en 2016), o prolongaron servicios y provisiones de bienes que incluso pasaron a formar parte de los requerimientos del mismo Estado.

Todo ello legitió socialmente a los empresarios, que recuperaron espacios otrora perdidos y finalmente ganaron determinante influencia con Moreno. Chiasson-LeBel considera que este es un factor que no se ha valorado con la observación que merece. Y, desde luego, tiene razón. Porque las izquierdas, por lo general, solo han considerado al empresariado como simple “burguesía” o “elite dominante”, sin detenerse a examinar sus acciones y mecanismos de actuación concreta, que les ha permitido ser actores políticos y lograr enchufarse en el Estado.

A lo dicho por el autor en referencia, cabe añadir algunas otras consideraciones esenciales. Porque desde la perspectiva histórica de largo plazo, los empresarios ecuatorianos han mantenido, desde inicios del siglo XX, una misma línea de acción en torno a tres cuestiones centrales: el rechazo al Estado interventor en la economía, el cuestionamiento a todo tipo de impuestos que afecten sus costos productivos o de mercado (en definitiva, sus ganancias), y la sistemática resistencia u oposición al avance de la legislación protectora de los trabajadores. En eso la “visión oligárquica” no ha sido alterada en un siglo.



Tampoco han demostrado ser el crisol de la modernización y de la avanzada innovadora (a pesar de cualquier aislada excepción), porque se han contentado con mantener posiciones rentistas y fortalecer un “capitalismo jerárquico”. Por lo general no han comprendido la necesaria institucionalización del Estado y el desarrollo de sus capacidades, que incluso se requieren para combatir con efectividad la corrupción pública y la privada, de la que nunca hablan.

A su conservadurismo económico es normal que se una su conservadurismo ideológico y político. Y su escudo en el “neoliberalismo” igualmente les ha impedido visualizar las nefastas consecuencias sociales y humanas de los sistemas de “mercado libre” en América Latina y en Ecuador; de modo que no se muestran preparados para impulsar procesos de construcción de economías sociales (por ejemplo, en la dirección de los modelos europeos o del canadiense), a los que muchos confunden como “comunistas”.

Es de esperar que esas características puedan cambiar en el futuro con la rapidez que el país merece, lo cual es, sobre todo, un desafío para las universidades, formadoras de los profesionales para la administración empresarial. ◀



EL MUNDO EN 2021

ISABEL ORTIZ, DIRECTORA DEL PROGRAMA DE JUSTICIA SOCIAL GLOBAL DE LA INICIATIVA PARA EL DIÁLOGO EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA INTER PRESS SERVICE (IPS)

Nueva York, Estados Unidos. El año 2020 terminó con una crisis humana y económica sin precedentes. La pandemia ha contaminado a 85 millones de personas y matado a 2.2 millones. Con los confinamientos, la economía mundial ha sufrido la peor recesión en 75 años, causando la pérdida de ingresos para millones de personas.

En un entorno tan sombrío, ¿cómo será el año nuevo? Si bien la incertidumbre es la única certeza, es posible que estos ocho puntos sean clave en el próximo año.

1. Una recuperación gradual pero desigual

Con la administración de vacunas y de las ayudas públicas, los países de ingresos altos avanzarán hacia la recuperación durante la segunda mitad del 2021. Sin embargo, los países de ingresos medios y particularmente los de ingresos bajos en África, Asia y América Latina, verán retrasada la recuperación, a menos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o China les proporcionen suficientes vacunas contra la Covid-19 y que los gobiernos aumenten el apoyo público.

Los sectores más afectados —turismo, viajes, hostelería, entretenimiento y actividades intensivas en mano de obra— tardarán más en recuperarse.

China fue el único país que experimentó un crecimiento económico significativo en 2020 y la tendencia se acelerará en 2021. El comercio internacional se recuperará, pero será un mundo más “desglobalizado”, con menores cadenas de suministro globales y más componentes locales.

2. Más pobreza y desigualdad en 2021

Si bien algunos se han beneficiado de la pande-

mia, como las ventas y aplicaciones en línea, productos farmacéuticos y servicios médicos, la mayoría no. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que durante la última mitad de 2020 se perdieron 590 millones de empleos de tiempo completo.

A pesar de las numerosas medidas de protección social implementadas, estas son insuficientes, la pobreza está aumentando en todos los países. Con el 40 por ciento de la población mundial (3 mil 300 millones de personas) por debajo del umbral internacional de pobreza de 5.5 dólares por día, el Banco Mundial estima que 150 millones de personas más caerán en la pobreza extrema en 2021.

Se necesitan más apoyo público y más impuestos progresivos para corregir estas tendencias. Sin embargo, hasta ahora son las grandes corporaciones las que se han beneficiado más de los billones (millones de millones) de dólares de los programas de ayuda y asistencia financiera de Covid, contribuyendo al incremento de la desigualdad. La pobreza y las desigualdades generarán más protestas en 2021.

3. Más salud pública, pero recortes de austeridad innecesarios

Un aspecto positivo de la pandemia es que el mundo se ha dado cuenta de la necesidad de sistemas de salud pública, que estaban generalmente sobrecargados, sin fondos y con poco personal debido a una década de austeridad (2010-2020). Si bien se aumentará el gasto público en salud, muchos están preocupados por la amenaza de nuevos recortes de austeridad.

Los costos imprevistos de la pandemia han provocado altos niveles de deuda y déficits fiscales en los países, y los gobiernos pueden recurrir a recortes de austeridad y a reformas de los servicios públicos, en vez de buscar alternativas para aumentar los presu-

puestos, como impuestos sobre la riqueza, combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos.

Los gobiernos que elijan la austeridad en 2021 deben esperar nuevas protestas, dados los impactos sociales negativos.

4. Digitalización y cambios en el mundo laboral

La pandemia ha acelerado el cambio tecnológico en el ámbito laboral. Más teletrabajo y menos tiempo en la oficina evitarán que las mujeres tengan que elegir entre la familia y su profesión, y harán que los padres se involucren más en las responsabilidades del hogar.

Hay estudios que indican que 47 por ciento de las empresas estadounidenses permitirán que los empleados trabajen desde casa a tiempo completo después de la pandemia.

Por otro lado, los trabajadores esenciales, como los de salud, el personal de limpieza, los conductores de reparto o los empleados en comercios, tendrán más poder de negociación en 2021, pueden presionar para lograr mejores condiciones laborales.

5. Reparar el desorden mundial

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, renovará el multilateralismo, el Acuerdo de París sobre cambio climático y otros acuerdos internacionales, la defensa de los derechos humanos y los intereses de la *Pax Americana*.

La ONU seguirá esforzándose cuesta arriba dada la baja financiación. Cuatro años de trumpismo y noticias falsas han dejado huella y, a pesar de los intentos democráticos por mejorar el orden mundial, el 2021 aún no verá una reversión de la tendencia hacia gobiernos nacionalistas autoritarios. Para ello, se necesitarán más esfuerzos para luchar la polarización, la desigualdad y la desinformación.

El yihadismo seguirá aumentando en África y el sur de Asia.

6. Una oportunidad para combatir el cambio climático

El mundo necesitaría replicar las reducciones de emisiones ocurridas en 2020 durante la próxima dé-

cada para reducir el calentamiento global 1.5 grados a fines de siglo. Sin embargo, los bajos precios del petróleo pueden retrasar la inversión en fuentes de energía alternativas en 2021, aunque estas reemplazarán a los combustibles fósiles en gran parte del mundo a mediano plazo.

7. El riesgo de una nueva crisis financiera seguirá siendo alto en 2021

Con la industria y los servicios estancados, las inversiones fueron al sector financiero, poco regulado, donde se obtienen mayores ganancias de la especulación. Los mercados de valores seguirán siendo volátiles, pero probablemente al alza, desligados de la economía real. Sin embargo, el incremento de las quiebras hará que los riesgos bancarios aumenten significativamente en 2021.

8. Los nuevos locos años 20

Después de los confinamientos, la gente querrá recuperar el tiempo perdido e ir a fiestas, cenas, festivales, espectáculos, deportes y viajes lo antes posible. En el 2021 puede florecer un nuevo verano (boreal) del amor, una época existencial creativa: *je carpe diem!*

El debate sobre las posibles vías de salida de la crisis actual continuará todo el año. Se trata de una crisis sin precedentes, que aún podría tener nuevos giros y en la que los gobiernos están aprendiendo mientras hacen camino.

En general, hay dos opciones.

Una es la restauración de políticas neoliberales, austeridad y servicios públicos mínimos, con bajos impuestos a la riqueza, que conducirá a más desigualdad y malestar social.

La otra es una ruta más democrática y social, donde las políticas públicas responden a los ciudadanos, incluyendo políticas económicas equitativas que generen empleo con protección social, financiadas con impuestos progresivos, la eliminación de la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos. La crisis del coronavirus podría convertirse en una oportunidad para hacer del mundo un lugar mejor y más justo para todos en 2021. ◀

CONSEJERÍA JURÍDICA DE PRESIDENCIA

FRENA DICTAMEN QUE DA PLENO ACCESO AL AGUA A INDÍGENAS DE OAXACA



La oficina de Scherer
detiene decreto que
otorga acceso al agua a
los zapotecos de los Valles
Centrales. El INPI confirma
que los indígenas cuentan
con la documentación para
ser reconocidos como
titulares del recurso natural

ÉRIKA RAMÍREZ

Desde hace 1 año, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República estaría frenando la publicación de un decreto que busca otorgar acceso pleno al agua a los zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca. Ello, a pesar de que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha entregado a la oficina del abogado Julio Scherer toda la documentación que se requiere para que se reconozca a los indígenas como titulares del recurso natural y también como sujetos con autonomía y libre determinación.

El abogado Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, explica a *Contralínea* que la importancia de ese decreto es que desactivaría un conflicto socioambiental que data de hace más de 15 años. Y que, además, se basa en el sentir de los pueblos originarios porque para llegar a ese acuerdo se hizo una consulta indígena, que respalda no sólo esa institución, sino también la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Todos los documentos surgidos de la consulta los

remitimos a la Consejería Jurídica para la parte final, porque tienen que transformarse en un nuevo decreto que quite la veda [al agua] y que establezca una zona reglamentada que tome en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas. Van a tener ese decreto por primera vez en la historia del país una especificidad cultural”, indica el funcionario.

La veda que menciona Aguilar Ortiz data de 1967, cuando la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos la estableció mediante un decreto presidencial, bajo el argumento de que era necesario evitar la extracción de agua de manera desordenada, prevenir la sobreexplotación del acuífero, procurar la conservación y controlar las extracciones de agua.

En su respuesta 0001600086220 dada a *Contralínea*, la Semarnat reconoce que éste es un conflicto socioambiental relacionado con “la gestión del agua de los pueblos zapotecos (Oaxaca)”. Ello, porque “la zona de los Valles Centrales de Oaxaca ha presentado problemas de contaminación del agua y disminución de los acuíferos. Por este motivo, 16 comunidades zapotecas se organizaron en la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (Copuda), y, tras casi 15 años de trabajo comunitario o tequio, los propios pobladores consiguieron recuperar las fuentes de agua”.

No obstante, la dependencia indica que “aunque éste es un notable caso de éxito en la gestión ciudadana, cuando las comunidades solicitaron a la Conagua [Comisión Nacional del Agua] la administración del vital líquido, se encontraron con una negativa para modificar el decreto de veda del acuífero, lo que derivó en un largo litigio desde 2009. Ante este conflicto, la nueva Semarnat optó por apoyar a los pueblos zapotecos, buscando una solución consensuada que permita a las comunidades administrar el agua por la que han trabajado y respetando el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas de México”.

Al respecto, Aguilar Ortiz indica que el INPI ha mediado también para resolver esta conflictividad. Y adelanta que la propia Consejería Jurídica de la Presidencia ha emitido ya las primeras observaciones pero no se ha logrado avanzar más.

Con base en dichas observaciones, agrega el funcionario, se realizó una reunión conjunta entre la Copuda, Conagua, Semarnat y el INPI, “un poco para insistir las razones que tuvimos para alcanzar esos acuerdos. Vimos receptividad por parte de la Con-

sejería, de hacer una revisión con control de constitucionalidad y convencionalidad, con la aplicación de tratados internacionales y en esa fase estamos: esperando ya una siguiente opinión de la Consejería, sobre este tema y sobre la propuesta que hicimos de manera conjunta... Ahí estamos instalados en este momento, confiamos en que podamos encontrar las fórmulas necesarias para hacer esta armonización”.

El abogado de origen násaavi considera que sí se ha avanzado en el caso, pues de los 15 años que lleva, sólo uno corresponde a la actual administración federal. “El resto, estuvo en la sede administrativa de la Conagua, cuando el titular era [José Luis] Luege Tamargo; luego, en la Sede Judicial en la Sala Metropolitana, con un resultado negativo”.

Lucha indígena

Para los zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca, la lucha por el reconocimiento de su derecho al agua también se ha convertido en lucha por el territorio, la libre determinación y la autonomía. Y ésta continúa, pues aunque hace un año el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver la situación, eso no ha pasado.

Este caso ha merecido la atención del de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, de la Unión Europea, así como organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional, pues involucra a 16 comunidades: San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol, San Sebastián, San Jacinto Ocotlán, Santa Ana Zegache, San Isidro Zegache, Asunción Ocotlán, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, San Matías Chilazoa, San Felipe Apóstol, Tejas de Morelos, La Barda Paso de Piedras, San Martín Tilcajete, El Porvenir y Maguey Largo.

En entrevista, Carmelina Santiago Alonso, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Flor y Canto —organización encargada de acompañar a los indígenas zapotecos de esta región— relata que esta conflictividad inició hace 15 años, cuando se quedaron sin agua para la agricultura en los Valles Centrales.

Además, la Comisión Nacional del Agua pretendió establecer multas por consumos de excedentes de agua, lo que desató las movilizaciones de los campesinos. “Vimos el problema de escasez de agua y propusimos a las comunidades entrar por esos dos ejes: el



► Representantes zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca celebraban acuerdo con autoridades federales hace más de 1 año

tema jurídico y la organización”.

El movimiento que se erigió en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua ha llevado a cabo un trabajo de captación de aguas pluviales y han registrado 548 obras. “La escasez ya se venía intensificando desde 2002. En 2005 ya era muy crítica la situación y es cuando les llega una carta invitación a los compas a sus domicilios para pagar el excedente de agua que habían gastado. Las multas variaban por cantidades, llegábamos a tener unas multas de 24 mil pesos”.

Más de 900 personas se inscribieron al movimiento para la defensa del agua y por los cobros indebidos, pero asistieron a las asambleas mucho más. “Nos acercamos a la Conagua para conocer dónde se fundamenta que ellos estaban gastando más agua. Después de varias visitas y reuniones, nos informaron que fue la Comisión Federal de Electricidad quien reportó que los campesinos en la región estaban reba-

sando las kilowattoras de energía eléctrica que tenían autorizadas en el subsidio”.

Santiago Alonso comenta que invitaron a los funcionarios a recorrer estas comunidades “para que ellos conocieran el nivel de agua que había bajado y que los campesinos, para poder tener y regar sus productos —sus verduras y legumbres— tenían que usar dos bombas, lo que generaba un doble desgaste de energía eléctrica. No es porque estuvieran gastando más agua, pues desde 2005 fue bajando el nivel del agua y eso es lo que provocó esta situación”.

La mujer que le entregó el bastón de mando indígena al presidente Andrés Manuel López Obrador el día que asumió el cargo, acusa que hay negligencia en algunos funcionarios para echar a andar este decreto, entre ellos, la directora general de la Conagua, Blanca Jiménez.

Al respecto, el abogado del INPI, Hugo Aguilar Ortiz, destaca que 2010 fue un parteaguas, por la

aprobación de la reforma en materia de derechos humanos. Ésta, indica, propició que un tribunal colegiado pidiera a la Primera Sala Metropolitana realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad relacionado con los derechos indígenas.

“Fue de este modo que la Sala Metropolitana emitió una resolución, fijando una posición sumamente interesante, sentencia única en su tipo a nivel nacional, que permite avances importantes de interpretación y aplicación de derechos indígenas. Ahí quedó durante mucho tiempo hasta, más o menos, 2013, que se obtuvo la resolución jurisdiccional y se estuvo 5 años en consulta, bajo el gobierno del presidente Peña Nieto”.

Para enero de 2019 fue retomado el tema con el actual gobierno de México y las instancias involucradas fueron: Conagua, Semarnat y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca –como órgano garante– y el INPI, como órgano técnico. Se desahogó el proceso de consulta ágilmente, de tal manera que la primera mesa fue en febrero y los acuerdos los alcanzaron en octubre. “En 10 meses pudimos desahogar lo que en cinco años no había salido”, señala Aguilar Ortiz.



► Los pueblos, con derecho a un título de concesión comunitaria



► Sin agua, no habrá futuro para las comunidades

El abogado comenta que ya están los acuerdos suscritos para encontrar un mecanismo de armonización de las facultades del Estado, a través de Conagua, sobre el agua y del derecho de las comunidades indígenas sobre su territorio y, en especial, sobre el agua.

El proyecto que frena la Consejería Jurídica

Hasta ahora todo se ha quedado en compromisos sin cumplir, pues la Consejería que encabeza el abogado Julio Scherer no ha resuelto el fondo del asunto, que es reconocer los derechos de los pueblos originarios al agua.

Y es que el proyecto de decreto que permanece atorado –del que *Contralínea* tiene copia– reconoce a las comunidades indígenas de los Valles Centrales su derecho a la libre determinación y autonomía; así



como, su derecho al territorio y a participar en la administración coordinada del acuífero.

Los puntos que se destacan son:

“Artículo 1: Se declara de utilidad pública la gestión integrada de los recursos hídricos del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas, como prioridad y asunto de seguridad nacional, la protección, mejoramiento, conservación y restauración, así como el restablecimiento del equilibrio ecológico de la acuífero de Valle Centrales, clave 2025, por lo que se establece zona reglamentada para administración, control de la extracción, explotación, uso o aprovechamiento y conservación de las aguas del subsuelo, sustentado en el reconocimiento del derecho humano al agua y respetando los derechos de las comunidades indígenas zapotecas al agua y sus recursos naturales y armonizando sus facultades con las atribuciones antes mencionadas.

“La zona reglamentada que se establece a través

de este decreto tendrá una vigencia de 30 años contados a partir de la entrada en vigor del presente instrumento y podrá modificarse el prorrogarse de subsistir las causas que le han dado origen.

“Artículo 2: Para efectos del presente decreto, se determina como son zonas reglamentadas aquella que ocupa de la acuífero Valles Centrales, clave 2025, cuyos límites fueron establecidos en el ‘ACUERDO’ acuerdo por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos y se modifica, para su mejor decisión, la descripción 202 acuíferos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de agosto de 2009...

“Artículo 6. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en materia de derechos indígenas se reconocen las comunidades indígenas que se encuentran dentro del territorio de los Valles centrales, clave 2025, su derecho a la libre determinación y autonomía así como su derecho al territorio y en consecuencia participar en la administración coordinada del acuífero, con los alcances y limitaciones es-



► Respaldo unánime al movimiento por la defensa del agua y contra los cobros indebidos



CORTESÍA COPUDA

► Un año del proyecto de decreto. En la imagen, de izquierda a derecha, Blanca Jiménez, titular de la Conagua; Víctor Toledo, entonces cabeza de la Semarnat; y Adolfo Regino, director del INPI

tablecidas en el presente Decreto, siempre y cuando sea para mejorar cuidar y proteger las condiciones de sustentabilidad hídrica del acuífero y las propias comunidades indígenas, así como la corresponsabilidad de mantenerlo en óptimas condiciones, con base en las normas contenidas en el presente capítulo y sus Sistemas Normativos.

“Artículo 7. Las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero de Valles centrales, tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y deberán elaborar y aprobar un reglamento comunitario, que deberá ser registrado ante la Comisión Nacional del agua, para que surta efectos frente a terceros, cuya implementación estará cargo de sus autoridades comunitarias, en el que se establecerán las reglas para la conservación, uso, administración, control de las aguas de la comunidad, así como los procedimientos y medidas correctivas, de conformidad con el sistema normativo de cada comunidad, los derechos huma-

nos y, de manera especial la dignidad e integridad de las mujeres.

“Respecto del uso, conservación y disfrute del recurso hídrico en los territorios de las comunidades indígenas, se deberá respetar el derecho de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de las mismas.

“Artículo 8. La Comisión Nacional del Agua en las comunidades indígenas se coordinarán en la realización de acciones específicas para favorecer la sustentabilidad hídrica del acuífero Valles centrales, coordinándose con las dependencias Del sector salud, ambiental y forestal, para implementar medidas y acciones integrales para la recarga natural del acuífero. A petición de las comunidades indígenas, la Comisión Nacional del agua podrá brindar asistencia técnica para realizar un manejo eficiente del agua. El ejercicio de los derechos indígenas implica la corresponsabilidad de las acciones a las que se refiere este artículo”.

Indigenismo invisibilizado

Una de las razones por las que es conveniente que se publique este decreto, comenta Hugo Aguilar Ortiz, funcionario del INPI, es porque sirve para ilustrar lo que viven los pueblos indígenas en materia de territorio, acceso a medios de comunicación, espectro radioeléctrico, agua y recursos naturales.

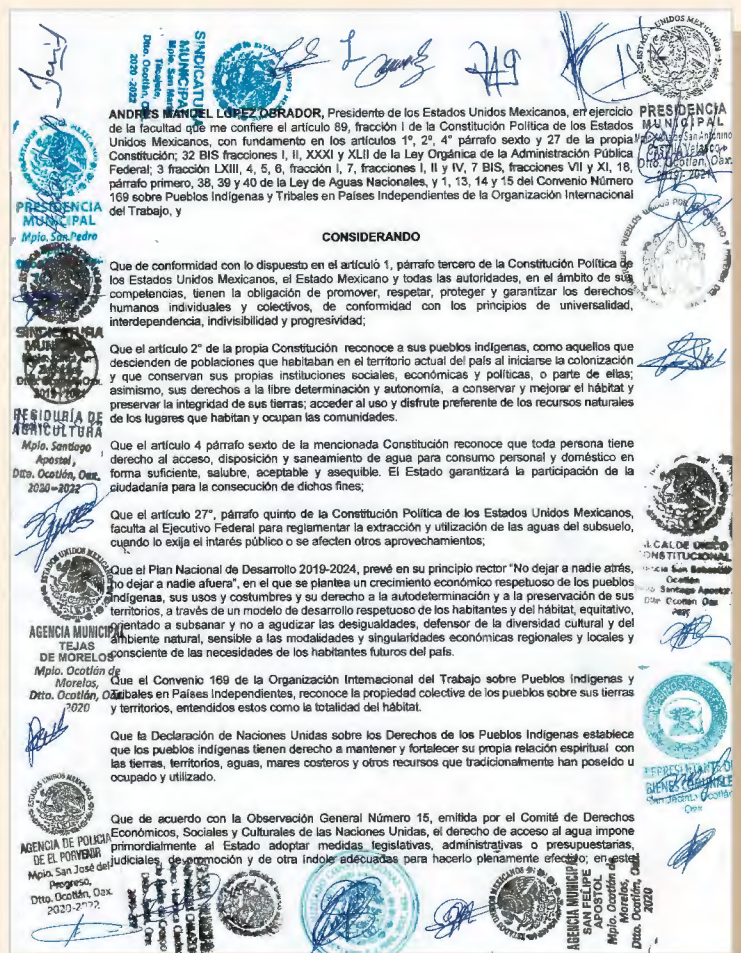
“Para el ciudadano común, para el resto de la sociedad el derecho es derecho, pero cuando hablamos de un derecho para pueblos indígenas parece que eso se degrada, ya no es tan derecho porque necesita ser confirmado por un tribunal y eso es un absurdo”, critica.

El artículo *El agua de la nación: entre los derechos humanos y el mercado*, de Francisco López Bárcenas, investigador del Colegio de San Luis en el programa de Agua y Sociedad, explica que “como parte de su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de las aguas que brotan en sus territorios o los atraviesan; además de ello tienen el derecho de usarlas y disfrutarlas de manera preferente, es decir, antes que cualquier otra persona, sin necesidad de concesión, y con base en su propio derecho. Sólo en caso de que no les interese usarlas y disfrutarlas, el Estado podrá concesionarlas a terceros, si los pueblos lo consienten libremente. Esto da pie a pensar en una regulación *sui generis* de este vital líquido, con base en sus propios sistemas de normas”.

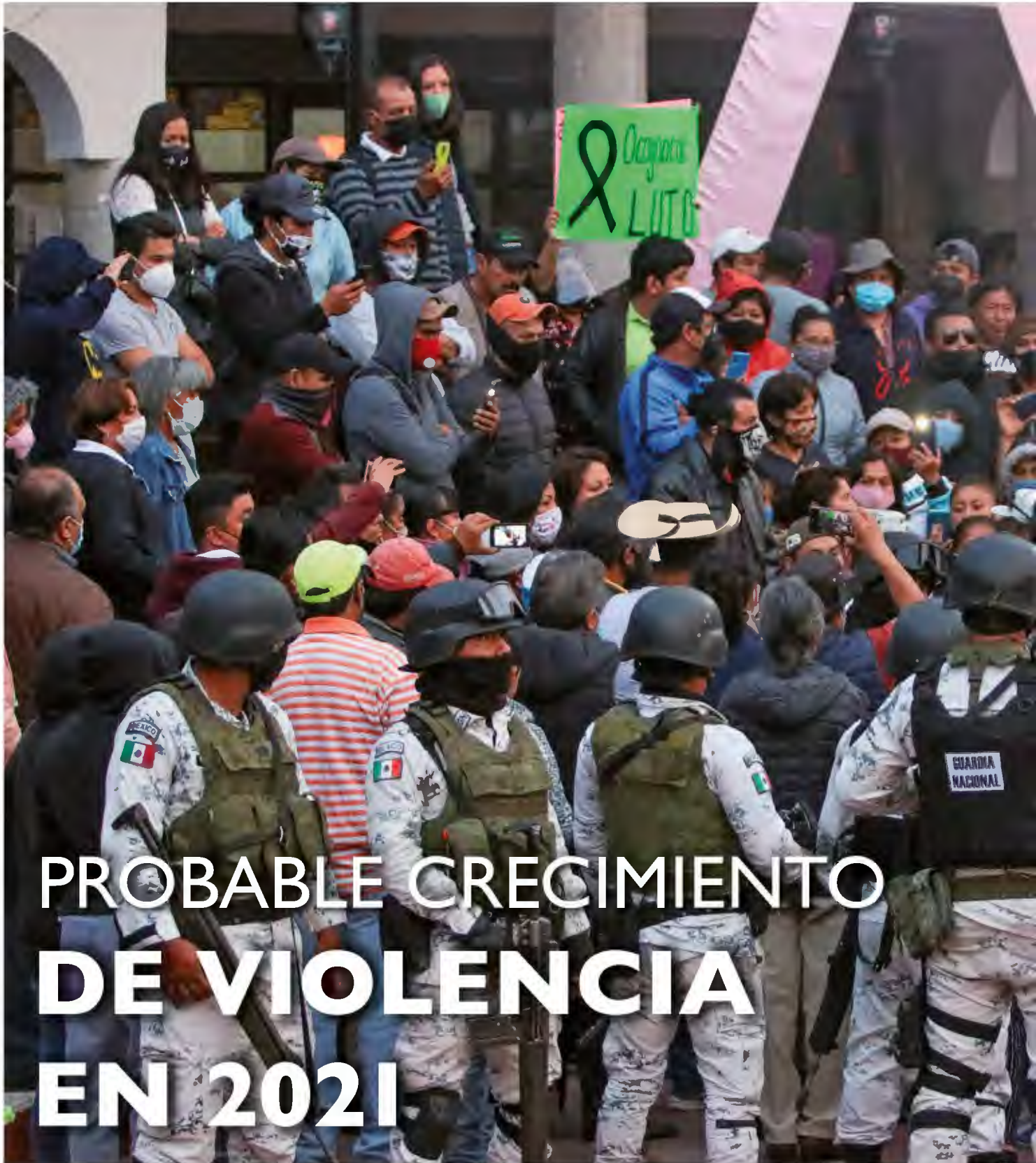
Destaca que en relación con su administración, hay aspectos que se deben cumplir, como “sacar el agua de la jurisdicción de la autoridad federal —en este caso la Conagua—, reconociéndosela a los pueblos correspondientes para que asuman esa función. La Conagua podría quedarse con facultades de supervisión para vigilar que se use de manera sustentable. Mientras no se legisle sobre este aspecto, la Conagua puede celebrar convenios de coordinación con los pueblos indígenas para transferirles las facultades administrativas que ahora realiza ese organismo”.

Dice que “no podemos olvidar que para los pueblos indígenas el agua, además de ser un elemento natural indispensable para la vida, en muchos casos representa su fuente de origen y por lo mismo adquiere rasgos culturales y sagrados, los cuales marcan las formas de organización y convivencia entre ellos, con la naturaleza y sus divinidades.

“Tampoco podemos perder de vista que el agua, como elemento natural, es un componente más de los que conforman su territorio, el espacio vital para su existencia y reproducción, sin el cual su vida como pueblo corre peligro. Para que los pueblos indígenas puedan gozar plenamente de su derecho al agua, es necesario adecuar las leyes a los principios constitucionales y de derecho internacional que reconocen plenamente ese derecho, pero también es indispensable modificar el órgano de gestión, sus atribuciones y facultar a los pueblos indígenas para que asuman el uso, disfrute, administración y conservación del agua, de acuerdo con sus necesidades, su estructura de gobierno y su visión sobre ella”, precisa el experto en la materia. ◀



▶ Proyecto de decreto detenido por la Consejería Jurídica de la Presidencia



PROBABLE CRECIMIENTO DE VIOLENCIA EN 2021



CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO

Los grupos criminales en México se habrían adaptado rápidamente el impacto de la pandemia de Covid-19, y aprovecharon la coyuntura de aislamiento y la distracción de los gobiernos, alerta la organización International Crisis Group. Por ello, estima que la violencia se incrementará en 2021

JOSÉ RÉYEZ

En el contexto de la pandemia de Covid-19, la amenaza de un aumento de la delincuencia 2021, año electoral en México, es inminente, alerta la organización no gubernamental International Crisis Group. Académicos consultados destacan que la Guardia Nacional aún no logra contener el crimen organizado.

A pesar de la desaceleración del flujo de personas y bienes a causa de las medidas de confinamiento, los grupos criminales se adaptaron rápidamente a la nueva normalidad, reforzaron y expandieron su control sobre la población y el territorio. “En México, los grupos criminales, en complicidad con actores estatales corruptos, son responsables de las tasas de homicidios más altas del mundo y ejercen un poder abrumador en un número cada vez mayor de comunidades”, advierte el International Crisis Group, organización no gubernamental con sede en Bruselas, Bélgica.

Afirma que el país se ha visto afectado durante años por organizaciones criminales trans-

“Para los grupos criminales la pausa fue corta. El intercambio de bienes ilícitos volvió a la normalidad y resurgió la extorsión”

nacionales que se alimentan de la falta de oportunidades económicas y la corrupción del Estado y las fuerzas de seguridad y, con presupuestos estatales bajo una enorme presión, en un entorno en el que las respuestas oficiales continuarán siendo precarias.

En su informe *Violencia a prueba de virus: crimen y Covid-19 en México y el Triángulo Norte* (noviembre 2020), considera que este país se ha visto afectado durante años por organizaciones criminales transnacionales que se alimentan de la falta de

oportunidades económicas y la corrupción del Estado y las fuerzas de seguridad.

“Las interrupciones en el comercio y las restricciones a la movilidad obligaron a algunos grupos criminales a suspender las actividades ilícitas. Pero la pausa fue corta. El intercambio de bienes ilícitos está volviendo a la normalidad, mientras resurge la extorsión”, refiere la ONG con presencia en 120 países, dedicada al análisis de conflictos graves.

Señala que, con algunas excepciones notables, la respuesta del gobierno de la cuarta transformación a la inseguridad crónica, hasta ahora, no ha logrado detener la violencia o reducir la impunidad por delitos graves. Por el contrario, considera que la política de seguridad del Estado enfrentará aún mayores obstáculos a medida que se reduzcan los presupuestos.

Advierte que las perspectivas de seguridad en México son poco prometedoras mientras persista la pandemia. “Bajo presión de actuar bajo la pandemia, el gobierno puede verse tentado a enfrentar las crecientes tasas de homicidios con medidas draconianas que replican los fallidos esfuerzos del pasado”.



► Presencia cotidiana

JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO



BERNARDINO HERNÁNDEZ CUARTOSCURO

► Ejecuciones extrajudiciales, disminución marginal

Consecuencias económicas graves

El International Crisis Group asienta que el país se ubica entre los lugares más violentos del mundo; enfrenta la perspectiva de un incremento en su ya grave inseguridad pública, a medida que la Covid-19 sacude al país; y se prepara para mitigar sus efectos económicos devastadores en el tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La ONG, con 120 expertos y analistas en el mundo, prevé una caída en el PIB cercana al 10 por ciento, acompañada de un marcado incremento en el desempleo, lo cual revertirá los avances en la reducción de la desigualdad y la pobreza, debilitará los servicios públicos en las zonas pobres, intensificará las rivalidades criminales y hará más propensos a los funcionarios

públicos a involucrarse en negocios ilícitos.

Apunta que después de meses de restricciones a las actividades económicas relacionadas con la pandemia, México se ha visto muy afectado por una caída del 47.1 por ciento en las exportaciones a Estados Unidos, y los economistas proyectan una disminución del PIB de alrededor del 10 por ciento en 2020.

Sólo entre marzo y junio, el país perdió más de 1 millón de empleos en el sector formal y hasta 11.5 millones en el sector informal. Mientras, el porcentaje de la población sin posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas podría llegar al 56 por ciento (70 millones de personas), según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Coneval concluye que la crisis de la Covid-19 amenaza los avances de México en desarrollo social y afectará de manera despropor-

cionada a los grupos más vulnerables. “Si esta estimación resulta acertada, representaría un aumento del 50 por ciento con respecto al número de mexicanos en situación de pobreza en el 2018”, indica Crisis Group. El análisis, sin embargo, no incluye las cifras de recuperación de empleos formales que para noviembre ya superaba los 500 mil.

En ese contexto que describe, observa que el aumento de la pobreza y la desigualdad podrían reforzar las condiciones que durante mucho tiempo han facilitado el crecimiento de negocios ilícitos y profundizar la amenaza que representan para el Estado y la sociedad los grupos criminales armados.

Fragilidad institucional

El aumento de la pobreza e informalidad económica, y estructuras e instituciones de salud débiles en México, impide una respuesta gubernamental rápida y efectiva para combatir la pandemia con éxito, advierte Raúl Benítez Manaut, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sostiene que ello conlleva a que, ante la aparición de la pandemia, las Fuerzas Armadas han sido requeridas por necesidad vital “por ser instituciones altamente disciplinadas, organizadas y con infraestructura flexible, donde el equipo y personal rápidamente pueden cambiar de misión”.

Considera que habrá consecuencias económicas y sociales muy duras en el futuro cercano para la población más vulnerable, emigración masiva y aumento exponencial de la pobreza, así como conflictos en 2021 entre los países de Centroamérica y México por el tema de la migración a Estados Unidos.

Las Fuerzas Armadas han sustituido roles de instituciones civiles, por ejemplo, vigilancia de instalaciones de salud protección de personal médico por incapacidad policiaca, construyen rápidamente hospitales, y personal médico-militar, rápidamente se adaptó al combate a la Covid-19, refiere el catedrático. “Todo el servicio médico militar se abre a población abierta por



órdenes del gobierno; los hospitales militares nunca habían abierto sus instalaciones a población civil. Esto es inédito”.

Benítez Manaut concluye que, en 2021, las Fuerzas Armadas serán necesarias y vitales en México, donde los esfuerzos militares han sido muy bien vistos por la población civil, participando activamente en la lucha anti coronavirus sin registrar acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

“Lo único predecible es que las fuerzas armadas tendrán un rol fundamental en el periodo de vacunación, pues se requerirá disciplina de la población”, enfatiza.

Mientras tanto, apunta que el debate político se centra en que, si bien “la militarización la ordenan líderes civiles, es urgente y necesaria, pero la pregunta es: ¿se quedarán empoderados políticamente los militares?”



123RF

Se dispara la extorsión

El reporte del International Crisis Group apunta que la extorsión ha sido una fuente fundamental de ingresos para los grupos criminales en México durante la pandemia. Sin embargo, se han visto obligados a adaptar sus actividades para mantener el flujo de dinero en circunstancias difíciles.

Agrega que las redes delictivas se han ido alejando de la dependencia del tráfico de drogas durante los últimos 15 años, expandiéndose a otros negocios ilícitos. Una de las áreas de crecimiento más lucrativas ha sido la de “gravar” las economías lícitas mediante la extorsión, pagos del sector agrícola, como las industrias de aguacate, limón y bayas en Michoacán y Jalisco.

La extorsión, que afecta a empresas de todos los tamaños, se ha convertido en un medio crucial

para generar ingresos en áreas donde la protección estatal es inexistente o deficiente. Según el Banco de México, una de cada 14 empresas en todo el país fue víctima de extorsiones en 2019, y la tasa aumenta a una de cada cinco en ciertas regiones.

La minería se ha convertido en una fuente más atractiva de ingresos por extorsión, incluso si los grupos criminales tienen que competir por ella. El precio del oro, que se ha disparado durante la pandemia debido a un flujo de inversión global hacia activos confiables, hará que el metal precioso sea aún más codiciado por los grupos criminales rivales.

Los cárteles mexicanos también han seguido beneficiándose de otros mercados ilícitos menos afectados por los cierres, como el tráfico de vida silvestre. La agricultura y la minería se han visto envueltas en estos esquemas, comenzado a dirigir pequeñas empresas, principalmente restaurantes, lavaderos de autos, talleres de carrocería y servicios de transporte local, en parte para lavar dinero.

La capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes y de encontrar fuentes de ingresos alternativas, combinada con los altos niveles de impunidad judicial y colusión estatal, explican la resiliencia operativa de muchos grupos criminales.

Elecciones 2021, en la mira del crimen

Ante los problemas de fortaleza institucional de las áreas de salud del gobierno mexicano, las Fuerzas Armadas han tenido que salir en apoyo, en auxilio de las políticas sanitarias en muchas áreas multidimensionales, considera Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, catedrático de ciencias políticas en la Universidad de las Américas.

Sostiene que la pandemia en México sí va a impactar en las elecciones del 2021 de manera negativa al gobierno de López Obrador, “sin lugar a dudas, por el tema de la economía”.

“Más o menos unos 10 millones de mexicanos de clase media afectados por el coronavirus, ya no van a salir a votar de nuevo por el gobierno de López Obrador. El partido del gobierno que



► Reducción de delitos federales. En la imagen, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.

lo llevó está en los niveles más bajos, cerca del 18 por ciento, aunque el presidente todavía tiene márgenes de confiabilidad de opinión pública magníficos”, enfatiza.

Vaticina que los partidos de derecha obtendrán más votos entre la clase media, “enojada porque no hubo un paquete de rescate importante para las empresas medianas y pequeñas, al tiempo que habrá una caída en la confianza de las instituciones, sobre todo sociales y el gobierno”.

Al respecto, Crisis Group apunta que la estrategia de conquistar los “corazones y las mentes” de la población tiene una motivación electoral: algunos grupos criminales utilizan sus servicios al público como un medio para que ciudadanos voten por sus candidatos o partidos en las próximas elecciones, con la idea de que, una vez en el cargo, estos políticos paguen el favor permitiéndoles operar con impunidad.

Reducción delictiva, quimera

Si bien se esperaban que la pandemia de Covid-19 redujera los delitos violentos en todos los ámbitos, eso no sucedió. Hasta ahora los efectos del virus sobre la violencia han sido fugaces, refiere Crisis Group.

Apunta que las políticas gubernamentales, en particular las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras, contribuyeron a reducir los niveles de violencia, al igual que la decisión de algunas pandillas de pasar por alto los cobros de extorsión.

Sin embargo, explica que después de una breve reducción, las tasas de homicidio ahora han regresado a los niveles anteriores a la pandemia en México, donde los altos niveles de conflicto armado persistieron, con tasas de homicidios en 2020 similares y posiblemente más altas que las de 2017 y 2018.

También, que los delitos violentos se han mantenido en niveles esencialmente constantes. Aunque las autoridades sugirieron medidas de contención desde el principio de la pandemia, éstas fueron en su mayoría voluntarias, teniendo en cuenta las tasas de transmisión inicialmente bajas.

Posteriormente, ante el aumento en contagios y muertes, el gobierno federal impuso algunas restricciones a las actividades económicas y de ocio, así como a la movilidad en general. Pero siempre se le dio una mayor prioridad a la actividad económica, y grandes extensiones del país donde la gente vive al día nunca entraron en cuarentena general.

Los Estados se enfrentan a grupos criminales revitalizados que se han adaptado a las restricciones de la pandemia, en medio de una de las recesiones económicas más marcadas que se hayan registrado en el país, con la probabilidad de que la pobreza y la desigualdad se agudicen aún más, llevando así a nuevos reclutas a los brazos de las organizaciones criminales.

El presidente López Obrador ha hecho de los programas sociales y económicos el eje de sus esfuerzos para combatir la inseguridad desde sus

“ Los Estados se enfrentan a grupos criminales revitalizados que se han adaptado a las restricciones de la pandemia ”

raíces. Sin embargo, persisten las dudas sobre la eficacia de estas iniciativas y su utilidad como respuestas a las consecuencias económicas de la pandemia, señala Crisis Group.

Al mismo tiempo, subraya que el gobierno de la cuarta transformación continúa volviéndose más dependiente de instituciones de seguridad altamente militarizadas, incluida la recién creada Guardia Nacional, “una fuerza policial que es civil sólo en el papel y se configura como un instrumento para combatir al crimen organizado”. ◀



123RF

LA CARRERA POR LA VACUNA ANTI-COVID Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL POSTPANDEMIA

Las vacunas contra la Covid-19 constituyen una poderosa arma de lucha geopolítica y geoestratégica entre las potencias y entre la salud pública y la privada. En los esfuerzos globales para atacar al coronavirus, una grave falla es que los países más pobres han sido excluidos

JORGE RETANA YARTO, ECONOMISTA CON ESPECIALIDAD EN INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL; MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; CANDIDATO A DOCTOR EN GERENCIA PÚBLICA Y POLÍTICA SOCIAL; EXDIRECTOR DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL



I 23RF

Inició en Estados Unidos la vacunación anti-Covid-19 —de Pfizer— el 14 de diciembre: es la primera que se aplica en todo el Continente Americano, en esta fase para el personal de salud. Ese país es el mayormente devastado por el contagio del SARS-Cov-2, con más de 300 mil muertos y 2 millones de infectados acumulados (12 mil defunciones cada 24 horas).

Ese mismo 14 de diciembre, la vacuna rusa Sputnik V solicitó permiso a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para empezar las pruebas en México. Las instituciones de salud rusas han afirmado que tiene una efectividad de casi el 92 por ciento y, a diferencia de otras, no ha presentado casos lamentables (muertes) luego de su aplicación. Para México están en camino, también, las vacunas de Moderna y CanSino Bio, mientras que la de Pfizer ya está en nuestro país.

Desde hace meses y hasta el día de hoy, las vacunas anti-Covid-19 constituyen una poderosa arma de lucha geopolítica y geoestratégica entre las potencias en la salud pública y privada, lo cual ha seguido a los cambios geopolíticos que trajo consigo la pandemia global.

Tras las primeras acusaciones entre China y Estados Unidos de haber provocado intencionadamente la crisis global de la pandemia Covid-19 para afectar sus intereses a nivel global y regional —lo que sugería una posible e inédita guerra bacteriológica entre las dos más grandes potencias—, Europa occidental, Asia, Eurasia y Norteamérica pasaron a desarrollar una batalla estratégica por la vacuna anti-Covid con base en las capacidades nacionales en los sistemas científicos y de salud; y en otros casos, mediante alianzas público-privadas, entre sistemas de salud públicos y con la participación de alianzas de capital para financiar los gigantescos gastos que todo ello conlleva.

Caso México

Países como México se han integrado a alianzas internacionales o regionales, y se han

apuntado como demandantes masivos con diferentes proveedores de vacunas. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que, durante su pasada visita a la Casa Blanca, solicitó al presidente Donald Trump su intervención para asegurar una provisión suficiente, aunque parcial porque no puede ser total, de parte de los proveedores estadounidenses de la vacuna, empezando por Pfizer, que se notaba adelantado en la carrera. Desde luego, México ha generado un fondo de recursos financieros para las compras, que en la última declaración del propio presidente López Obrador consta de 20 mil millones de pesos (unos 1 mil millones de dólares aproximadamente).

Hoy somos de los seis únicos países que ya tienen vacunas: sólo 250 mil, pero ya empiezan a llegar y seguirán fluyendo. También se ha dado a conocer un Plan Nacional de Vacunación en cinco etapas, con un estimado de 100 millones de dosis para nuestro país. Si los proveedores cumplen lo que se ha venido pactando, es alentador.

Las alianzas internacionales

En ese contexto de la lucha global contra la pandemia, de forma aproximada (porque está emergiendo nueva información semana a semana) el panorama de las alianzas es el siguiente:

a) coalición sobre las innovaciones para las pandemias (CEPI): es una asociación mundial que engloba organizaciones públicas, privadas, filantrópicas y de la sociedad civil que trabajan para acelerar el desarrollo de vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes y permitir el acceso equitativo a esas vacunas para las poblaciones afectadas. Creado durante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) en 2017, con el objetivo de contar con un plan coordinado, internacional e intergubernamental para desarrollar y desplegar nuevas vacunas que puedan



La Iniciativa de Medicamentos ha facilitado un mayor trabajo colaborativo de la industria biofarmacéutica con entidades públicas de todo el mundo



prevenir futuras epidemias. La CEPI ha intervenido en el desarrollo de vacunas contra el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), contra los virus Lassa, Nipah y Ébola. Desde el primer momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de la Covid-19 constituía una emergencia de salud pública a nivel mundial, CEPI manifestó su deseo de colaborar para hacer frente a este nuevo virus (el 17 enero de 2020, CEPI inició ocho proyectos de desarrollo de vacunas contra la nueva enfermedad), y México se adhirió a este proyecto en mayo de 2020. Se han propuesto tener al menos tres vacunas probadas que puedan presentarse a las autoridades reguladoras para obtener una licencia para uso general.

b) Alianza OMS: conglomerada a distintas coaliciones para garantizar el acceso a la producción de las nuevas tecnologías y productos esenciales para atacar la Covid-19; es decir, incluye fabricación de fármacos. Las organizaciones agrupadas en torno a la OMS son: Fundación Bill & Melinda Gates, CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), DCVMN (Developing Countries Vaccine Manufacturers Network), Gavi, the Vaccine Alliance, The Global Fund, IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations), IGBA (International Generic and Biosimilar Medicines Association) Unitaid, Wellcome. Lanzaron esta alianza el 24 de abril de 2020. Ocho en total.

Hay dos objetivos de esta coalición que destacan: acceso global equitativo a herramientas innovadoras para atacar la Covid-19, y concreción de niveles de asociación sin precedentes: involucrarse de manera proactiva con las partes interesadas para alinear y coordinar esfuerzos. Construir sobre las colaboraciones existentes, idear soluciones colectivas y

basar la asociación en la transparencia y la ciencia.

c) Acelerador Terapéutico Covid-19: iniciativa lanzada el 10 de marzo de 2020 por la Fundación Bill & Melinda Gates, el Fondo Wellcome y MasterCard para acelerar la respuesta a la pandemia, mediante la identificación, evaluación, desarrollo y ampliación de tratamientos. Desempeñará un papel catalítico al acelerar y evaluar medicamentos y productos biológicos nuevos y reutilizados para tratar a pacientes con Covid-19 en el plazo inmediato, así como otros patógenos virales a largo plazo. También investigan varios aspectos del ciclo de desarrollo para simplificar la ruta del producto candidato a la evaluación clínica, el uso y fabricación. Trabaja con la OMS, con organizaciones gubernamentales y del sector privado, así como con instituciones globales reguladoras. Al compartir investigaciones, coordinar inversiones y agrupar recursos, estos esfuerzos acelerarán la investigación.

d) “Solidaridad”: es un ensayo clínico internacional puesto en marcha el 18 de marzo 2020, por la OMS, como otro de sus frentes de acción global, y sus asociados para encontrar un tratamiento eficaz contra la Covid-19. En este ensayo participan pacientes de diversos países, y consiste en procedimientos simplificados (que no requieren la realización de trámites burocráticos), lo que permite que participen hospitales con sobre cupo de pacientes. Hasta el 8 de abril de 2020, más de 90 países colaboraban para encontrar cuanto antes tratamientos eficaces a través del ensayo.

e) Iniciativa de Medicamentos (IMI): es la mayor iniciativa de colaboración público-privada del mundo, que tiene como objetivo revitalizar la investigación biomédica en Europa para conseguir medicamentos más seguros y eficaces en tiempos más cortos. Es una colaboración



I23RF

entre la Comisión Europea y la industria farmacéutica europea (representada por EFPIA), aprobada por el Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2007. Su objetivo es mejorar la salud, acelerando el desarrollo y acceso de los pacientes a medicamentos innovadores, y en particular, en áreas con necesidades médicas no cubiertas. Facilitan la colaboración entre los principales agentes involucrados en la investigación biomédica, incluidas universidades, centro de investigación, industria farmacéutica, pequeñas y medianas empresas, asociaciones de pacientes y reguladores oficiales.

La IMI ha facilitado también el trabajo colaborativo de la industria bio-farmacéutica con entidades públicas para desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas contra la Covid-19.

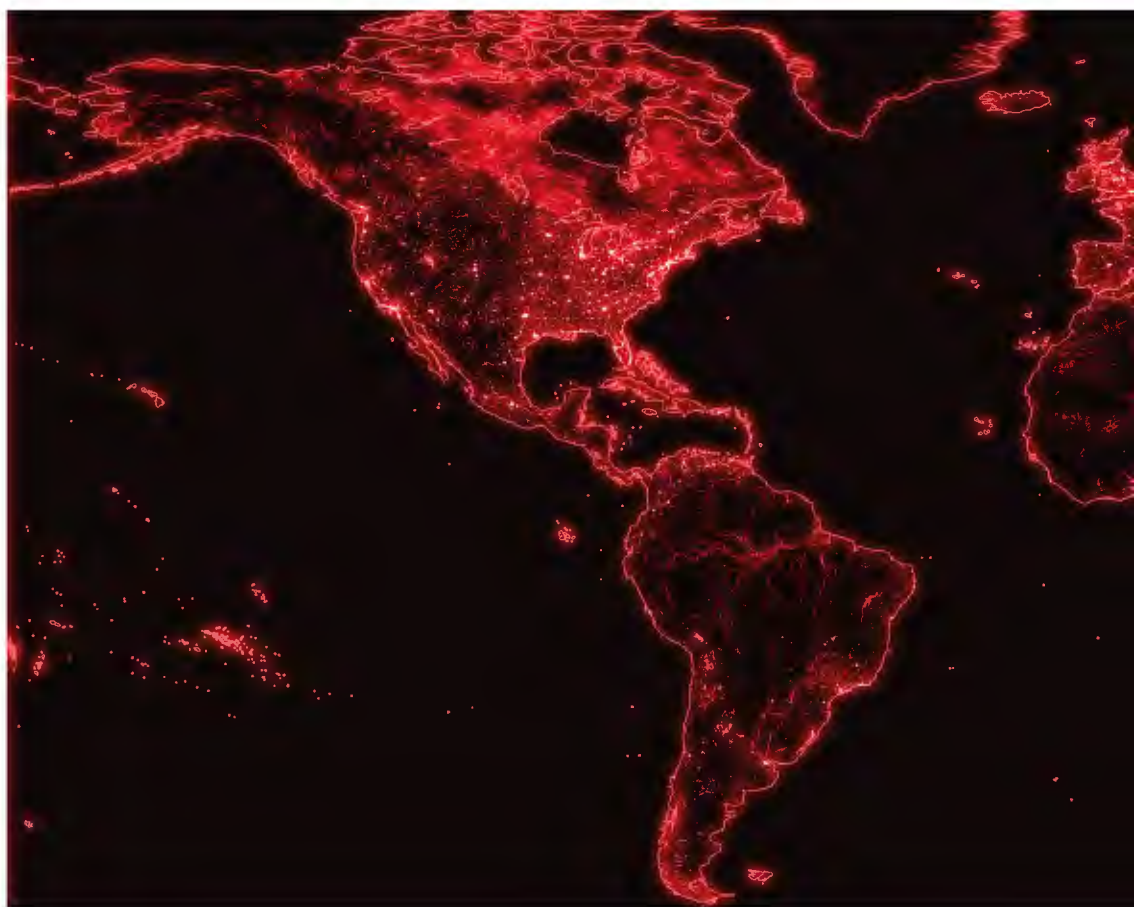
f) Instituto Nacional de Salud NIH-ACTIV: es una estrategia internacional conformada por los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación para los NIH (FNIH), que son empresas bio-farmacéuticas, de la Oficina de Salud y Servicios Humanos del subsecretario de Preparación y Respuesta, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Agencia Europea de Medicamentos, todos ellos convergiendo en esfuerzos para acelerar el desarrollo de opciones terapéuticas y vacunas contra la Covid-19. Igualmente, acelerando sus trabajos conjuntos.

g) Coalición BARDA (Biomedical Advanced Research Development Authority): organismo que apoya la innovación

“

Gobiernos, empresas de transporte, aeropuertos, organizaciones de la salud y farmacéuticas diseñan planes, calculan costos y firman acuerdos

”

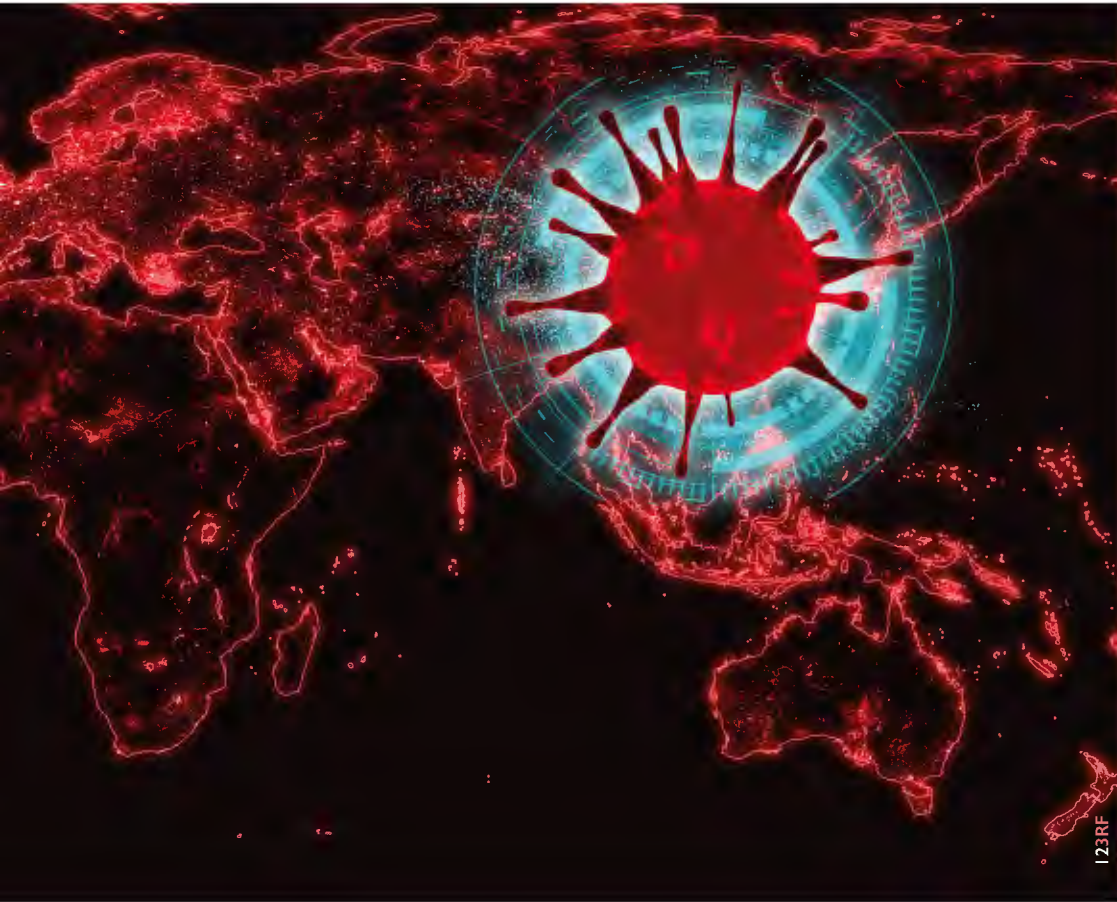


de medidas preventivas médicas como vacunas, medicamentos y diagnósticos, desde la investigación hasta el desarrollo avanzado para su consideración y aprobación por parte de la FDA. BARDA se creó en diciembre de 2006, con la finalidad de proteger a la población de enfermedades infecciosas emergentes e influenza pandémica, así como amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Trabaja con el financiamiento, asistencia técnica y servicios básicos, que van desde una red de organizaciones de investigación clínica hasta centros para la innovación en desarrollo avanzado y fabricación. Desde febrero de 2020 trabaja en asociación con Regeneron desarrollando “anti-cuerpos monoclonales” para los virus MER y SARS, así como la vacuna contra la Covid-19.

Promueve para ello, asociaciones público-privadas.

Ha sido impresionante el tipo de alianzas, coaliciones de muy distinto tipo: gobiernos, empresas de transporte, aeropuertos, organizaciones de la salud y farmacéuticas de todo el mundo diseñan planes, calculan costos y firman acuerdos para facilitar las vías para llevar una potencial vacuna a sus territorios, algunos sumamente extensos y con muy alta demografía.

Son siete las alianzas internacionales para atacar la pandemia global que tienen cuatro grandes ejes estratégicos: el capital privado (a través de empresas farmacéuticas, laboratorios), organismos de la sociedad civil (filantrópicos, ONG, fundaciones), e instituciones públicas de salud y organismos multilaterales (OMS-OPS) de los cinco continentes. Alianzas globales para la investigación, la reali-



“

Los países de más bajos ingresos requieren ser integrados en una visión global de distribución y aplicación de la vacuna contra la Covid-19

”

zación de pruebas y la producción masiva. Muchos reciben financiamiento para I&D de gobiernos nacionales (las llamaremos “del primer grupo”). Pero hay “alianzas cruzadas”, algunos de estos actores participan en otros organismos y alianzas.

Mecanismo Covax

Además de las alianzas, a instancias de la OMS hay 172 países agrupados en el “Mecanismo COVAX” apoyado por el “CEPI” (en los meses recientes se integraron nueve miembros) y coordinados por el organismo denominado GAVI [Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, integrada por organizaciones públicas y privadas administradas por la secretaría de la iniciativa GAVI/corporación suiza y dirigida por la junta de accionistas, según Unicef] para una colaboración

efectiva con los laboratorios fabricantes de vacunas. Así, la OMS promueve “un acceso equitativo” y la negociación de un procedimiento de “acceso en común”. Es la iniciativa mundial más importante y en ella participa México.

Países pobres excluidos

En este esfuerzo global para atacar la pandemia, el gran tema es que los países de más bajos ingresos requieren ser integrados en una “visión global”, y dentro también de otro mecanismo de negociación en vías de conclusión: la distribución y aplicación de la vacuna contra la Covid-19. Este punto no está aún resuelto, aunque no se haga énfasis en esta ausencia. Y es una grave falla del proceso actual orientado a la compra, distribución y colocación de vacunas.



123RF

Al respecto, México presentó ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas una resolución para promover el acceso igualitario a medicamentos, vacunas y otros insumos médicos, la cual fue apoyada por 179 países y aprobada por unanimidad. En paralelo, nuestro país participó en la “Conferencia para la Respuesta Global al Coronavirus y en la Cumbre Global de Vacunas”. México participa en todos los esfuerzos multilaterales para el aceleramiento, desarrollo, producción y distribución justa de la vacuna contra la Covid-19: Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias CEPI; Alianza Global de Vacunas e Inmunización y la OMS.

GAVI, CEPI y la OMS han creado la “Plataforma de Acceso Global” para la vacuna contra la Covid-19 (el COVAX), la cual tiene como objetivo distribuir, al menos, 2 mil millones de dosis de la vacuna contra la Covid-19

para finales de 2021. COVAX garantiza a México 20 por ciento de cobertura. Bajo otras alianzas, para el próximo año nuestro país pretende disponer de 100 millones de dosis, por lo cual participa en un fondo multilateral —hasta ahora se han recaudado unos 10 mil millones de dólares para ello— y buscando alianzas sobre todo con China, Italia, Estados Unidos, Rusia, Francia, Argentina, Cuba y Gran Bretaña, mediante mecanismos de cooperación bilateral-regional.

Rusia se convirtió en el primer país que aprobó, a la fecha, dos vacunas contra la Covid-19, con un liderazgo mundial aún cuestionado en occidente, desarrolladas por el Instituto Gamaleya de Moscú, vacunas que pasaron por todas las revisiones, aplicaciones y experimentaciones científicas (entre miles de humanos), planteadas por la OMS (fase 3), cuya prueba final debe ser completada y tar-

da meses en recopilarse los resultados experimentales, para determinar el lapso efectivo de inmunidad. Rusia ha sido acusada por Occidente de robar investigaciones desde laboratorios de sus países. Las vacunas rusas son dos aprobadas y aplicadas en Rusia, que hoy están en proceso en una carrera mundial de los gobiernos y los laboratorios para frenar la pandemia del nuevo coronavirus.

El Fondo Ruso de Inversión Directa, el fondo soberano de inversión de Rusia y la compañía farmacéutica Landsteiner Scientific anunciaron un acuerdo con México para suministrar 32 millones de dosis de Sputnik V.

Estados Unidos tiene en proceso y una ya funcionando, otras seis vacunas en fase de pruebas y ha avanzado en el estándar solicitado por la FDA para su aprobación (además de la vacuna de Pfizer).

Dos empresas chinas presentaron en septiembre de 2020 en la ciudad de Pekín sus vacunas contra la Covid-19. Las dosis producidas por las empresas Sinovac Biotech y Sinopharm forman parte de algunos de los proyectos de vacuna más avanzados del mundo y generaron grandes expectativas en China. Se encuentran en fase 3. Sus fabricantes esperan obtener el visto bueno de las autoridades para ponerlas en el mercado antes de que termine este año.

Estas vacunas (la rusa, china y otras) podrían empezar a aplicarse en México en febrero-marzo de 2021 (deben ser aprobadas por la Cofepris). México es uno de los 12 países en desarrollo con quienes China ha acordado que participen en la fase 3 (prueba en seres humanos). En el mundo son más de 50 las vacunas que están en esa fase. Incluso China está estudiando la opción de relocalizar plantas de producción de la vacuna en dos o tres países latinoamericanos, uno sería México.

La Geopolítica y Geoestrategia pos-pandemia

Hoy se habla ya en las cancillerías de las

principales potencias, que el “mundo post-Covid-19 no será igual que el anterior”. El reacomodo de las potencias y el propio balance de poder entre ellas depende de cuatro factores que se incubaron y desarrollaron en el curso de la pandemia global: el impacto de ella en cada país, la rapidez y efectividad con que respondieron ante el tremendo desafío que ella ha significado; la profundidad de la afectación económica y la capacidad que se está mostrando para recuperarse, y el manejo del liderazgo al interior de la propia pandemia global, en lo cual el tema del avance científico-técnico clínico y epidemiológico representando por las vacunas es fundamental, marcará la nueva distribución del poder en el mundo. Veremos luego si todo impactó la fuerza militar.

De allí que éstas hayan asumido un contenido geopolítico y estratégico de primer orden, porque modificará el status de las grandes potencias con los países y las distintas regiones del planeta, considerando también su grado de inmunización efectiva. Especialmente, la forma en que se resuelva el tema de la distribución equitativa, es decir, la cobertura hacia los países sin ingresos para adquirirlas a instancias de los esfuerzos que hace la OMS y sus instituciones aliadas.

Los servicios de inteligencia deberán estar en extremo activos porque la geopolítica de la Covid-19 ha alterado los términos de la geopolítica estratégica. Es necesario que los servicios de inteligencia generen una *proyección de carácter estratégico* a partir de un análisis muy meticuloso de la experiencia actual, con el estudio de todas sus variables. No es fácil pero sí indispensable, como lo es abrir estos trabajos de información a la sociedad nacional. Y en muchos aspectos, esta problemática lo es también de inteligencia económica de carácter estratégico. Hay que avanzar en ello, si queremos adelantarnos al futuro. Hoy los servicios de inteligencia de los países europeos y asiáticos se están reconfigurando aceleradamente para responder a los nuevos desafíos que plantea la era post-pandemia global. México va a la zaga. ◀

“

Los servicios de inteligencia deberán estar en extremo activos porque la geopolítica de la pandemia ha alterado la geopolítica estratégica

”

BIDEN EN AMÉRICA LATINA CAMBIOS Y CONTINUIDADES

La victoria del demócrata Joe Biden en Estados Unidos no parece marcar un cambio sustantivo en las relaciones de dominación que el país promueve sobre América Latina. Cambia el estilo, pero no hay buenas noticias para México, Centroamérica y el Cono Sur

SILVINA ROMANO, DOCTORA EN CIENCIA POLÍTICA/ ANÍBAL GARCÍA FERNÁNDEZ, MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS/ TAMARA LAJTMAN, MAESTRA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS/ Y ARANTXA TIRADO, DOCTORA EN RELACIONES INTERNACIONALES/CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE GEOPOLÍTICA (CELAG)



DAVID MANRIQUE

El lunes 14 de diciembre pasado votaron los compromisarios en el Colegio Electoral de Estados Unidos, ratificando el anunciado triunfo de Joe Biden, que luego deberá ser confirmado por el Congreso el 6 de enero. Según lo informado en las últimas semanas, el probable gabinete de Biden podría ser caracterizado como una elite “especializada”, con trayectoria en universidades, *think tanks* y exfuncionarios de la gestión de Barack Obama, marcando una diferencia importante con el recorrido de los funcionarios de confianza de Trump (más vinculados al mundo empresarial).

En términos generales, se renuevan los ejemplos de puerta giratoria, integrando a exdirectores ejecutivos de grandes corporaciones y directores o miembros de *think tanks* renombrados. Destacan, entre otros: el propuesto secretario de Defensa, general retirado Lloyd Austin, miembro de la junta directiva de empresas del complejo industrial-militar como Nucor corporation y Raytheon Corporation; el secretario de Estado, Antony Blinken, exintegrante del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS); Neera Tanden, a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto, hasta ahora directora del Center for American Progress. La diferencia con el gobierno republicano es también visible en una retórica y una estética centradas en la diversidad: una mujer estará al mando de Inteligencia, un latino dirigirá la Seguridad Nacional y un afrodescendiente dirigirá el Pentágono.

Desde el gobierno estadounidense se afirma que la prosperidad de América Latina y la Seguridad Nacional de Estados Unidos constituyen un interés mutuo. A continuación se enumeran una serie de temas y problemas asociados a la diplomacia, la asistencia para el desarrollo y la política energética, así como cuestiones de seguridad, que atravesarán las relaciones de Estados Unidos con América Latina a partir de la nueva gestión.

Diplomacia

Existe un consenso sobre que Biden debe recuperar la diplomacia como principal arma de la política exterior. Esto implicaría “devolver” la diplomacia a los profesionales y hacer creíble de nuevo la palabra de Estados Unidos en el mundo. En este sentido, parece clave que la política exterior de Biden sea conceptualizada como una política exterior “para la clase media”, manteniendo ciertas continuidades con la política de los demócratas a nivel nacional durante las gestiones de Barack Obama.

Con respecto de Cuba y Venezuela, el objetivo de Biden será presionar para lograr cambios “democráticos”. Se espera que lo haga a través de instrumentos de *soft power*; es un cambio de táctica pero no de objetivo final: el cambio de régimen.

Efectuará otorgamiento del prometido Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en Estados Unidos y el otorgamiento de 20 mil visas pendientes a cubanos.

Buscará la aplicación de “sanciones inteligentes” contra Venezuela como parte de una estrategia más amplia de recuperación de la democracia.

Está por verse si se desestima la “carta Guaidó” y el apoyo de la Administración anterior a la opción golpista representada por Guaidó/López, sustituyéndolo por una apuesta al liderazgo de Henrique Capriles Radonski que implica, en este momento, una confrontación que está dispuesta a negociar reconociendo la institucionalidad venezolana existente.

La estrategia hacia Cuba pasa por la defensa de los derechos humanos y empoderar al pueblo cubano: eliminación de la prohibición de las remesas y viajes que impuso la Administración Trump y restauración del Programa de Reunificación Familiar Cubano (CFRP) y el programa de refugiados cubanos.

“

Se reactivará la ‘asistencia para desarrollo’, con la USAID al frente. Buscarán incidir en cambios de gobierno en toda América Latina. Cuba, incluida

”

Con respecto de la política de integración, como se hizo en la Administración Obama, hará uso de la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe para minar Petrocaribe y, con él, la influencia de Venezuela entre los países del Caribe.

Echará a andar un plan de fomento de la participación en organizaciones multilaterales pues, “bajo el liderazgo adecuado”, permiten “la participación de todos en nuestro futuro”, como ha declarado en propio Biden. Estados Unidos pretende recuperar la iniciativa en los acuerdos económicos para evitar que China marque las reglas.

Se espera un posible reimpulso a la Alianza del Pacífico como mecanismo de articulación de los acuerdos comerciales bilaterales de Estados Unidos. Insinuación sobre la importancia del Acuerdo Transpacífico para ejercer de dique a la inversión china, lo que podría llevar a su reactivación.

Con respecto de la Federación de Rusia, buscará el reforzamiento y la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) bajo el discurso de contener la “agresión de Rusia”.

Tratará de impulsar la denuncia de las violaciones de Rusia a las leyes internacionales y respaldar a la sociedad civil rusa frente a su “sistema cleptocrático y autoritario”. Esto pasa por mantener las sanciones a Rusia por su “invasión” a Ucrania.

Hará lo posible por recuperar la función del Ejecutivo de Estados Unidos de apoyar la contención a la expansión rusa que antes estaba en manos del Congreso y la iniciativa privada, a causa de la “permisividad de la Administración” Trump con Rusia.

Dará apoyo a los vecinos de Rusia en su “transformación democrática” como contraejemplo para Rusia y presión a su democratización, a la vez que se contrarresta la influencia rusa en los países de su área de seguridad.

Desarrollará una política para contrarrestar y neutralizar las supuestas operaciones de ciberguerra del Kremlin.

Pugnará por la renegociación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START, por su sigla en inglés) de armas estratégicas ofensivas en la agenda, pues caduca en 2021. Se trata de un asunto clave para garantizar la no proliferación nuclear en un contexto de previsibles crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia.

Una presión muy fuerte a Rusia, junto a la confrontación con China, podría llevar a que ambos países se unieran todavía más. Esta alianza Rusia-China constituye uno de los principales desafíos para cualquier administración de Estados Unidos.

Asistencia para el desarrollo

Al ser un gobierno demócrata, es esperable que tome a la asistencia para el desarrollo como uno de los pilares fundamentales articulado con la diplomacia. Es probable que se otorgue nuevamente un rol político más protagonista a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), y se restituya su lugar en el Consejo de Seguridad Nacional. Se habla, incluso, de la posible creación de un Departamento de Desarrollo Global y una Ley de Desarrollo Global, junto con un Plan Marshall de Desarrollo Sustentable (en línea con el fuerte impulso de políticas para paliar el cambio climático).

En el plano de la “inversión para el desarrollo”, en continuidad con la gestión Trump, se reforzará el liderazgo del Development Financial Corporation para cumplir con los objetivos de la Ley para la Construcción (Build Act, del gobierno de Trump): prioridad a las inversiones en regiones de bajo ingreso y ambiente frágil, y en la evaluación e información sobre el impacto de los proyectos de desarrollo; se



DAVID MANRIQUE

propiciará la colaboración entre la Development Finance Corporation (DFC), la USAID y otras agencias.

La asistencia para el desarrollo es una reconocida arma de poder blando, que entre sus numerosos objetivos puede incluir la desestabilización y el cambio de régimen de gobiernos no aliados, “Estados fallidos”, etcétera. La actual coyuntura puede ser propicia para la proliferación de organismos de asistencia. Ejemplo: se acaba de crear un organismo bipartidista (integrado por republicanos y demócratas) denominado “Grupo de trabajo sobre la estrategia de Estados Unidos para apoyar la democracia y contrarrestar el autoritarismo”, integrado por los *think tanks* como la Freedom House, el CSIS y el McCain Institute.

La asistencia para el desarrollo como herramienta de poder blando forma parte de

los procesos de *lawfare* a nivel regional, a través de asistencia y asesoría a los aparatos judiciales y a fundaciones y organizaciones no gubernamentales que instalan o refuerzan el relato anticorrupción, antiprogresista o de apoyo a la ortodoxia neoliberal. En efecto, se ha informado que el gobierno de Biden probablemente redoble su combate a la corrupción y el vínculo entre gobierno y narcotráfico, especialmente en Centroamérica.

En este sentido, la asistencia para el desarrollo se vincula a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la asistencia para la seguridad. Las políticas migratorias son un ejemplo de la articulación de desarrollo y seguridad, pero a nivel regional se refleja en otras dimensiones también.

La migración proveniente de Centroamérica intentará ser contenida a través de la Estrategia integral para América Cen-

“
El nuevo
gobierno de
Estados Unidos
buscará el
reforzamiento
y la expansión
de la OTAN bajo
el discurso de
“contener a
Rusia”

tral (4 mil millones de dólares) que tendrá prioridad de fondos del Homeland Security e inversión del sector privado, incluyendo alianzas público-privadas y mayor protagonismo del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desarrollo infraestructura y promoción de la inversión extranjera en la región.

Se articulará con la lucha contra la corrupción, mediante reformas de las fuerzas de seguridad, poder judicial y asistencia técnica a jueces y fiscales para el combate de delitos financieros; y la creación de una nueva oficina como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para investigar la corrupción en el Triángulo Norte.

Se prevé una mayor presencia de los agregados de los Departamentos de Justicia y Tesoro en las embajadas centroamericanas.

Política energética

Tres aspectos son fundamentales para la Administración Biden: los desajustes del petróleo ligados a la pandemia y crisis económica de las empresas petroleras; el proyecto de energía renovable para Estados Unidos ligado al cambio climático que se viene financiando desde hace años; y la presencia china en América Latina en proyectos de infraestructura y energía.

Uno de los temas que se debaten entre las empresas petroleras es cómo solucionará, al interior del Partido Demócrata y en su gobierno, las peticiones de grupos para acelerar la transición energética y el *lobby* que realiza el *big oil* a través de la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas (OGCI), grupo que aglutina a BP, Chevron, CNPC, Eni, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Royal Dutch Shell y Total, que en conjunto representan más del 30 por ciento de la producción mundial de petróleo y gas.



Será clave si el Senado es controlado por republicanos, pues están más ligados al *big oil* y podrían detener cualquier iniciativa en contra de la producción de petróleo. Aun así, Biden puede promover un *green new deal* vía orden ejecutiva, retirando apoyos fiscales y volviendo a restricciones para nuevos pozos en tierras federales.

En el caso de México, las pugnas están por el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), el bloqueo del gobierno mexicano a que empresas de energías renovables surtan energía eléctrica y la política de vínculo en infraestructura energética entre ambos países, derivado del proyecto integracionista de América del Norte. En este sentido, sigue siendo clave la resolución de controversias bajo el Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos y Canadá (Tmec) y la presencia de Landau en la Embajada.



DAVID MANRIQUE

Según el *think tank* AS/COA, la Administración Biden planea invertir en Argentina en energía limpia, infraestructura sostenible y proyectos de innovación. Por otro lado, si se concreta la política de no permitir nuevos pozos en Estados Unidos, el yacimiento Vaca Muerta sería clave para las empresas ligadas al *fracking*.

Para Brasil, los problemas están centrados en la política ambiental de Bolsonaro. En debate presidencial, Biden propuso crear una iniciativa global de 20 mil millones para salvaguardar la Amazonía. Bolsonaro ha rechazado este proyecto argumentando que va en detrimento de la soberanía brasileña. No obstante, el gobierno de Estados Unidos tiene claro que Brasil es uno de los principales socios a nivel hemisférico.

Colombia seguiría siendo la “piedra angular” de la política estadounidense en la

región, a través del fortalecimiento de energías renovables y las relaciones históricas de Biden con el país, así como de su asesor Juan González, experto en América Latina y el Caribe y con amplios vínculos con políticos colombianos. Desde el Atlantic Council se ha creado un grupo con participación de senadores estadounidenses para formular políticas bilaterales Colombia-Estados Unidos.

Ligado a Venezuela está la probable cancelación del gasoducto de Keystone XL, que vincula a Estados Unidos y Canadá, pues podría derivar en que las refinerías de Estados Unidos para petróleo pesado se surtan del petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de Venezuela. Además, están las sanciones económicas al sector energético, que lo mismo han reducido la producción que permitido a algunas empresas operar en el país.

Hay continuidad en lo referente a China en torno a su presencia en América Latina y el Caribe con la Administración Trump. La diferencia podría estar en fortalecer la presencia de Estados Unidos por la vía multilateral y en organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoyándose en la Ley para la Construcción ya puesta en marcha. Los temas centrales al respecto son:

- Reordenar la cadena de suministro de tierras raras; para ello Trump avanzó en financiar investigaciones sobre tierras raras en Estados Unidos, a partir del carbón mineral.

- Impulsar la Iniciativa para la Gobernanza de los Recursos Energéticos.

- Crear la Red Limpia (en torno a la red 5G) para evitar que empresas chinas coloquen sus equipos. Entre los argumentos esgrimidos, se encuentran supuestas vulnerabilidades cibernéticas en el marco de amenazas a la seguridad nacional. Un ejemplo es que en junio de 2019, Trump se comuni-

“

Las pugnas con México serán por el fortalecimiento de Pemex y el bloqueo del gobierno de AMLO a las energéticas estadounidenses

”



có con Bolsonaro para financiar la compra de tecnología 5G de empresas europeas, como Nokia y Ericsson, para así desincentivar el desembarco de la tecnología 5G de empresas como Huawei en Brasil.

El fortalecimiento de una política energética centrada en renovables crea contradicciones profundas. Por un lado, los grandes productores no tendrían incentivos fiscales, sin posibilidades de nuevos pozos y aún en plena pandemia. Por otro lado, fortalecimiento de proyectos de renovables en América Latina, región rica en hidrocarburos y rica en minerales estratégicos que son clave para las energías renovables (litio, carbón, cobre, grafito, entre otros). Por último, la presencia china en proyectos energéticos, no sólo fósiles, también renovables, acentúa la competencia entre ambas potencias.

Seguridad

Con respecto del Comando Sur, las acciones seguirán bajo la determinación de que las influencias rusa, china e iraní son amenazas de largo plazo a la seguridad estadounidense.

Se advierte ya preocupación por los acuerdos portuarios de China en torno al Canal de Panamá, así como la firma de 40 acuerdos portuarios de aguas profundas en lugares como México, Bahamas, El Salvador, República Dominicana y Jamaica.

Se prevé el incremento de la asistencia en respuesta a desastres naturales, incluidas más operaciones conjuntas entre la USAID y el Comando Sur. Como dato al respecto, el Comando Sur tiene cerca de 400 proyectos y ha invertido 24 millones de dólares en respuesta a la Covid-19.

Seguirán siendo prioritarios los esfuerzos antinarcóticos en el continente y el brazo militar seguirá fortalecido. Actualmente, un 60 por ciento de las operaciones antinarcóticos involucran a “socios regionales” y la perspectiva es que eso se incremente como resultado de los programas de cooperación en seguridad.

La ciberseguridad tendrá aún más protagonismo en la agenda para la región. La presencia de ZTE y Huawei en el hemisferio se considera amenaza al ciberespacio e inteligencia cibernética.

Es poco probable una intervención militar directa en Venezuela, que seguirá siendo el epicentro de la estrategia de disciplinamiento a nivel regional. Desde el punto de vista militar, seguirá siendo prioritario el intercambio de información e inteligencia con los socios regionales (principalmente Brasil y Colombia).

Destaca el informe de Evan Ellis (profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y asesor del Comando Sur) publicado en CSIS: China podría persuadir o intimidar a uno o más actores en América Latina para permitir que el Ejército Popular de Liberación chino use sus puertos, campos aéreos u otras instalaciones en apoyo de operaciones militares contra Estados Unidos.

Refuerzo políticas antinarcóticos y anticorrupción

Reorganización del el aparato antinarcótico y anticorrupción, institucionalizado desde hace décadas, pero al que la gestión Trump no otorgó mayor relevancia. Se prevé una mayor flexibilización de las autoridades de financiamiento, incluidos fondos de emergencia; el establecimiento de programas de asistencia “más compactos” basados en el modelo de Millennium Challenge Corporation; y recursos adicionales a la Red de

Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (Fincen, por su acrónimo en inglés).

Biden se remonta a la política línea dura de inicios de la década de los años 2000 (que persiste hasta la actualidad), jactándose de ser “el tipo que armó el Plan Colombia”; y fue una de los ideólogos de la Alianza para la Prosperidad lanzada en 2014, luego de que Obama decretara una “crisis humanitaria” por la llegada masiva de niños centroamericanos a la frontera de Estados Unidos.

Colombia y la región andina serán claves por tema narcotráfico, tratados de libre comercio y más aún por Venezuela.

Con respecto de la cuestión migratoria y Centroamérica, la “política migratoria integral” promovida por Biden no será menos securitizada.

Las acciones planteadas para los primeros 100 días incluyen la moratoria temporal de las deportaciones, legalización de aproximadamente 11 millones de inmigrantes no autorizados y el restablecimiento del programa de Acción Diferida para los Llegados desde la Infancia (DACA, por su sigla en inglés). Con un Senado controlado por republicanos, serán numerosas las dificultades para lograr el éxito legislativo en un tema tan controvertido.

El nombramiento del cubanoamericano Alejandro Mayorkas como secretario del Homeland Security, retrotrae a las acciones más sombrías de la administración Obama-Biden, como el inicio del uso de instalaciones para detención de migrantes similares a cárceles, continuadas por Administración Trump.

La nueva administración podría enfrentarse con un incremento de los flujos migratorios a inicios de su gestión (como lo vio la Administración de Trump en sus meses iniciales), lo que implicaría un primer desafío a las promesas de campaña. No es menor el hecho de que muchos estadounidenses siguen apoyando las políticas migratorias de tolerancia cero, principalmente en contexto de pandemia. ◀

“

Es poco probable una intervención militar directa en Venezuela, pero el país seguirá siendo el epicentro de la estrategia de disciplinamiento

”

LA GUERRA, MÁS LETAL QUE LA PANDEMIA DE COVID-19

Washington ordena y dirige toda la política exterior de “Occidente”. Le secunda Londres. Pueden hacer lo que quieren, donde quieren, cuando sus “intereses estratégicos” lo requieren. Hoy, entusiastas, ya preparan las próximas guerras. Cientos de vidas ya han sido segadas para mantener una supremacía cada vez más costosa

JOHN PILGER/COUNTERPUNCH-REBEIÓN*

DAVID MANRIQUE

El Memorial de las Fuerzas Armadas Británicas es un lugar evocador y silencioso. Situado en la hermosa campiña de Staffordshire, en un parque donde crecen 30 mil árboles en amplias colinas, sus figuras homéricas conmemoran la determinación y el sacrificio. Los nombres de más de 16 mil soldados, hombres y mujeres están grabados en piedra. La leyenda dice que “murieron en el teatro de operaciones o víctimas de un atentado terrorista”.

El día que lo visité un cantero estaba añadiendo nuevos nombres de los caídos en unas 50 operaciones en todo el mundo, durante lo que se conoce como “tiempo de paz”. Malasia, Irlanda, Kenia, Hong Kong, Libia, Palestina y muchos otros lugares, incluyendo operaciones secretas como la de Indochina.

Desde que se declaró la paz en 1945, no ha pasado un solo año sin que Gran Bretaña haya enviado fuerzas militares a combatir en las guerras del imperio. No ha pasado un solo año sin que algunos países, la mayoría empobrecidos o desgarrados por conflictos, hayan comprado armas británicas (o las hayan conseguido mediante “créditos blandos”) para promover las guerras o los “intereses” del imperio.

¿El imperio? ¿Qué imperio? El periodista de investigación Phil Miller ha desvelado recientemente en [el sitio web británico] Declassified que el Reino Unido de Boris Johnson mantiene 145 plazas militares (llamémoslas bases) en 42 países. Johnson alardea de que Gran Bretaña pronto será “la principal potencia naval de Europa”.

En medio de la mayor emergencia sanitaria de los tiempos modernos, cuando el Servicio Nacional de Salud (NHS) ha retrasado más de 4 millones de operaciones quirúrgicas, Johnson ha anunciado un incremento de 16 mil 500 millones de libras en el llamado “gasto de defensa”, una cifra que serviría para restaurar varias veces la maltrecha sanidad británica.

Pero estos miles de millones no son para la defensa. Gran Bretaña no tiene más enemi-

gos que aquellos que traicionan desde dentro del país la confianza de sus ciudadanos corrientes, de sus enfermeros y sus médicos, sus cuidadoras, ancianos, indigentes y jóvenes, tal y como han hecho los sucesivos gobiernos neoliberales, tanto conservadores como laboristas.

Según iba dejándome invadir por la serenidad del Memorial Nacional de la Guerra me di cuenta de que ningún monumento, plaza, pedestal o rosalda honraba la memoria de las víctimas de Gran Bretaña, los civiles fallecidos en las operaciones “en tiempo de paz” que aquí se conmemoran.

No hay ningún recuerdo para los libios asesinados cuando su país fue deliberadamente destruido por el primer ministro David Cameron y sus colaboradores en París y Washington.

No hay una sola palabra de arrepentimiento por las mujeres y niños serbios caídos bajo las bombas británicas, arrojadas desde la seguridad que proporciona la altura sobre escuelas, fábricas, puentes y ciudades por orden de Tony Blair; o por los empobrecidos niños yemeníes muertos por disparos de los aviones saudíes, pertrechados por Gran Bretaña desde la seguridad de sus cuartos con aire acondicionado de Riad; o por los sirios muertos por falta de alimentos a consecuencia de las “sanciones”.

No hay monumento alguno en recuerdo de los niños y niñas palestinos asesinados con la prolongada connivencia de la élite británica, como la reciente campaña que destruyó el modesto movimiento reformista que se estaba produciendo en el interior del Partido Laborista con engañosas acusaciones de antisemitismo.

Hace 2 semanas el jefe del Estado Mayor Militar de Israel y su homólogo británico firmaron un acuerdo para “formalizar y perfeccionar” la cooperación militar. Pero dicho acuerdo no fue considerado de importancia para salir en las noticias. A partir de ahora, aumentará el armamento y el apoyo logístico

“
Rusia, toda
una potencia
nuclear, está
cercada por el
mayor grupo
belicista del orbe
conocido como
Organización
del Tratado del
Atlántico Norte
”

de Reino Unido hacia el régimen despiadado de Tel Aviv, cuyos francotiradores disparan contra muchachos y cuyos funcionarios psicópatas someten a interrogatorio a menores reclusos en régimen de aislamiento (véase el reciente y escalofriante reportaje de la organización no gubernamental Defense for the Children, Isolated and Alone).

Tal vez lo más llamativo del memorial de guerra de Staffordshire sea la total ausencia de reconocimiento del millón de iraquíes cuyas vidas fueron destruidas, junto con su país, por la invasión ilegal capitaneada por Tony Blair y George Walker Bush en 2003.

Un miembro del British Polling Council, la organización ORG International, cifra ese número de muertes en 1.2 millones de personas. En 2013, la consultora ComRes preguntó a una muestra representativa de la población británica cuántos iraquíes habían muerto en la invasión. Una mayoría contestó que menos de 10.000.

¿Cómo es posible mantener ese silencio letal en una sociedad avanzada? En mi opi-

nión, esto se debe a que la propaganda resulta mucho más efectiva en una sociedad que se considera libre que en las dictaduras y autocracias. Aquí incluyo la censura por omisión.

Nuestras industrias de la propaganda — tanto cultural como política, incluyendo a la mayor parte de los medios de comunicación— son las más poderosas, extensas y refinadas de la Tierra. Es posible repetir sin cesar las mayores mentiras con la cadencia confortable y creíble de las voces de la BBC. Las omisiones no son problema.

Lo mismo ocurre con la guerra nuclear, cuya amenaza “carece de interés”, citando a Harold Pinter. Rusia, toda una potencia nuclear, está cercada por el grupo belicista conocido como Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y tropas británicas efectúan regularmente “maniobras” justo en la frontera en la que se produjo la invasión de Hitler.

a difamación de todo lo relacionado con Rusia, en particular la ocultación de la verdad histórica de que fue principalmente el Ejérci-



DAVID MANRIQUE



DAVID MANRIQUE

to Rojo el que ganó la Segunda Guerra Mundial, ha penetrado en la consciencia pública. Los rusos “carecen de interés”, excepto como demonios.

China, otra potencia nuclear, es el principal foco de una provocación continua: los bombarderos estratégicos y los drones de Estados Unidos rastrean constantemente su espacio aéreo y el nuevo portaviones HMS Queen Elizabeth, que ha costado 3 mil millones de libras, pronto zarpará para recorrer 6 mil 500 millas con el fin de proteger la “libertad de navegación” frente al continente chino.

China está rodeada por unas 400 bases estadounidenses, “atrapada en el lazo”, como me dijo en una ocasión un antiguo funcionario del Pentágono. Se extienden a lo largo de todo el Pacífico, desde Australia hasta China meridional y septentrional y a través de Eurasia. Y en Corea del Sur, el sistema de misiles

balísticos denominado THAAD (Terminal High Altitude Air Defense) apunta directamente a China, al otro lado del estrecho Mar de China Oriental. Imaginen qué pasaría si hubiera misiles chinos en México, en Canadá, o en la costa californiana.

Unos pocos años después de la invasión de Irak realicé una película llamada *The War You Don't See* (*La guerra que usted no ve*) en la que preguntaba a destacados periodistas británicos y estadounidenses y a directivos de noticiarios de televisión —todos ellos colegas de profesión— cómo era posible que Bush y Blair fueran a escabullirse del enorme crimen cometido en Irak, dado el caso de que sus mentiras no eran muy inteligentes.

Su respuesta me sorprendió: si hubiéramos cuestionado las afirmaciones de la Casa Blanca y de Downing Street, si hubiéramos investigado y sacado a la luz las mentiras,



DAVID MANRIQUE

en lugar de amplificarlas y repetirlas, probablemente la invasión de Irak de 2003 no se hubiera producido. Hoy día seguiría vivo un gran número de personas. Cuatro millones de refugiados no habrían tenido que huir de su país. Posiblemente el siniestro Estado Islámico, un producto de la invasión de Blair/Bush, no habría sido engendrado.

David Rose, que entonces escribía en el *Observer* londinense (diario que apoyaba la invasión) explicaba que “la sarta de mentiras me llegó a través de una sofisticada campaña de desinformación”. Por su parte, Rageh Omah, entonces corresponsal de la BBC en Irak, me contó: “No logramos presionar los botones más incómodos lo bastante fuerte”. Dan Rather, presentador de la BBC, estaba totalmente de acuerdo, como muchos otros.

Admiro a estos periodistas que rompieron el silencio, pero lo cierto es que constituyen

honrosas excepciones. En la actualidad nuevos personajes baten con entusiasmo los tambores de guerra en Gran Bretaña, Estados Unidos y “Occidente”.

Elija usted mismo a su favorito entre la legión de quienes despotrican y promueven ficciones como el escándalo de la trama rusa. Yo daría el Oscar a Peter Hartcher, del *Sydney Morning Herald*, cuyas imparables e impactantes estupideces sobre la “amenaza existencial” (de China y de Rusia, especialmente de China) iban acompañadas de la foto de un sonriente Scott Morrison, el relaciones públicas que ocupa el cargo de primer ministro en Australia, vestido como Churchill, con el signo de la victoria y todo. “Desde los años 30 no había ocurrido...” entonaban ambos. *Ad nauseum*.

La pandemia de Covid ha proporcionado una excusa para esta pandemia de propaganda. En julio, Morrison siguió el ejemplo de

Trump y anunció que Australia, que carece de enemigos, destinaría 270 mil millones de dólares en crearse uno, con la compra de un sistema de misiles capaces de llegar a China. El hecho de que las exportaciones de minerales y productos agrícolas a China genere importantes ingresos económicos para Australia “carecía de interés” para el gobierno en Canberra.

Los medios de comunicación australianos alabaron esta medida prácticamente con una sola voz, soltando un montón de exabruptos sobre China. El gobierno chino aconsejó a los miles de estudiantes chinos, que permiten los sabrosos salarios de los vicedecanos de las universidades australianas, que se fueran a estudiar a cualquier otro lado. Se calumnió a los chino-australianos y algunos repartidores sufrieron agresiones. No resulta difícil revivir el racismo colonial.

Hace años entrevisté a un antiguo director de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) para Latinoamérica, Duane Claridge. En pocas y

sorprendentemente sinceras palabras, vino a decir que Washington era quien ordenaba y dirigía la política exterior de “Occidente”. La superpotencia, afirmó, podía hacer lo que quería, donde quería, cuando sus “intereses estratégicos” lo requerían. Sus palabras fueron: “El mundo tendrá que acostumbrarse a ello”.

He sido reportero en diversas guerras. He presenciado restos de niños, de mujeres y de ancianos que habían sido bombardeados y quemados vivos; sus aldeas convertidas en escombros, sus árboles petrificados con restos humanos. Y mucho más.

Quizás esa sea la razón por la que siento un especial desprecio por quienes promueven el crimen de las guerras voraces, que las fomentan con mala fe y blasfemias sin haberlas experimentado nunca. Es nuestro deber romper con su monopolio.

* Publicado originalmente en *Counterpunch* (www.counterpunch.org). La traducción es de Paco Muñoz de Bustillo para *Rebelión* (www.rebelion.org) ◀

“

La pandemia de Covid-19 ha proporcionado una excusa para las campañas de propaganda mentirosa. Pero esas ‘victorias’ discursivas no tendrán efecto

”



LA VIOLENCIA EN LÍNEA DAÑA PROFUNDAMENTE A LAS MUJERES PERIODISTAS

El clima de impunidad que rodea a los ataques en línea resulta más dañino para las mujeres periodistas. El anonimato envalentona a los perpetradores, desmoraliza a la víctima, erosiona los cimientos del periodismo, exagera los riesgos para la seguridad del periodismo y socava la democracia

JULIE POSETTI/RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS-INTER PRESS SERVICE (IPS)



DAVID MANRIQUE

Washington, Estados Unidos. Un número alarmantemente alto de mujeres periodistas son ahora blanco de ataques en línea asociados con campañas de desinformación digital orquestadas. El impacto de estos ataques incluye la autocensura, la elección de alejarse de la visibilidad, un mayor riesgo de lesiones físicas y un costo grave para la salud mental. ¿Los principales perpetradores? Troles anónimos y actores políticos.

Estos hallazgos se encuentran entre los primeros publicados en una encuesta realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés) y el Centro Internacional para Periodistas (IJNET, por su sigla en inglés) sobre la violencia en línea contra mujeres periodistas. Pintan un retrato global de la naturaleza profundamente arraigada del abuso de género, el acoso y los ataques sexualizados contra mujeres periodistas, junto con los obstáculos para encontrar soluciones efectivas.

La encuesta es la más completa y geográficamente diversa realizada hasta el momento sobre el tema de la violencia en línea. Se ofreció en cinco idiomas y recibió respuestas de 714 mujeres periodistas en 113 países. Es parte de un estudio más amplio encargado por la UNESCO para examinar la violencia en línea en 15 países, con énfasis en las experiencias interseccionales y el Sur Global.

Las mujeres periodistas encuestadas dijeron que habían sido sometidas a una amplia variedad de formas de violencia *online*, incluidas amenazas de agresión sexual y violencia física, lenguaje abusivo, mensajes privados de acoso, amenazas de dañar su reputación profesional o personal, ataques de seguridad digital, tergiversación a través de imágenes manipuladas y amenazas económicas.

Estos métodos de ataque son cada vez más sofisticados y evolucionan con la tecnología. También están cada vez más asociados con ataques orquestados alimentados por tácticas de desinformación diseñadas para silenciar a las periodistas. Esto apunta a la necesidad de que las respuestas a la violencia en línea crezcan al mismo ritmo en términos de sofisticación tecnológica y coordinación colaborativa.

Estos son los 12 hallazgos principales del informe que fue publicado por la UNESCO en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos:

(1) Casi tres de cada cuatro mujeres encuestadas (73 por ciento) dijeron que habían experimentado violencia en línea. Los ataques en línea hacia mujeres periodistas han sido un problema durante muchos años. Ahora, éstos parecen estar aumentando en forma drástica e incontrolable en todo el mundo, como ilustraron nuestras encuestadas.

(2) Amenazas de violencia física (25 por ciento) y sexual (18 por ciento) afectaron a las mujeres periodistas encuestadas. Pero estas amenazas no sólo están dirigidas a dichas mujeres sino que se extienden. El 13 por ciento de las encuestadas dijo que había recibido amenazas de violencia contra sus allegados.

(3) Una de cada cinco mujeres encuestadas (20 por ciento) dijo que había sido atacada o abusada fuera del entorno de internet en incidentes originados en línea. Este dato es particularmente preocupante dada la correlación emergente entre los ataques *online* y el asesinato impune de periodistas. En hallazgos relacionados, 13 por ciento dijo que aumentó su seguridad física en respuesta a la violencia en línea, y 4 por ciento dijo que había faltado al trabajo debido a la preocupación de que los ataques salieran de la esfera *online*. Esto pone en evidencia tanto su sensación de vulnerabilidad como su conciencia de las

Las mujeres periodistas se encuentran cada vez más en la mira de las campañas de desinformación digital que se aprovechan de la misoginia

posibles consecuencias de los ataques digitales.

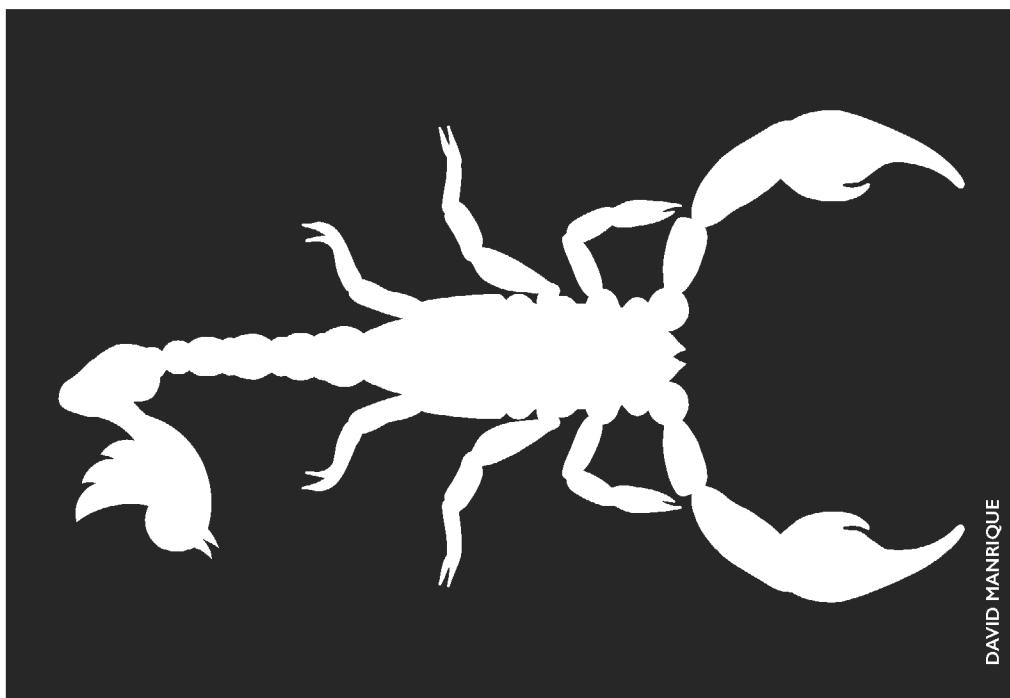
(4) Los impactos en la salud mental de la violencia *online* fueron la consecuencia identificada con mayor frecuencia (26 por ciento). El 12 por ciento de las encuestadas dijo que había buscado ayuda médica o psicológica debido a los efectos de la violencia en línea, y 11 por ciento dijo que se había ausentado al trabajo como resultado. La violencia *online* contra mujeres periodistas genera un daño psicológico significativo, especialmente cuando es abundante y sostenida. Pero nuestra encuesta también demostró que los empleadores de los medios de comunicación deben hacer mucho más para apoyar la salud mental y el bienestar de sus periodistas. Solo 11 por ciento de nuestras encuestadas dijo que su empleador les brindaba acceso a un servicio de terapia si eran atacadas.

(5) Casi la mitad (48 por ciento) de las mujeres informaron haber sido acosadas por medio de mensajes privados no de-

seados. Esto demuestra que gran parte de la violencia en línea dirigida hacia mujeres periodistas ocurre en las sombras de internet, lejos de la vista del público, por lo que abordar el problema puede ser aún más difícil.

(6) El tema que se identificó con mayor frecuencia en asociación con el aumento de los ataques fue el género (47 por ciento), seguido de la política y las elecciones (44 por ciento), y los derechos humanos y la política social (31 por ciento). Estos datos subrayan el rol de la misoginia en la violencia *online* contra mujeres periodistas. También destaca el papel de los ataques políticos a la prensa, relacionados con la política populista en particular, que exacerban las amenazas a la seguridad del periodismo.

(7) El 41 por ciento de las mujeres encuestadas dijo que había sido blanco de ataques *online* que parecían estar vinculados a campañas de desinformación orquestadas. Las mujeres periodistas se en-





DAVID MANRIQUE

cuentran cada vez más en la mira de las campañas de desinformación digital que aprovechan la misoginia y otras formas de discurso de odio para desprestigiar el periodismo crítico.

(8) Los actores políticos fueron la segunda fuente más frecuentemente señalada (37 por ciento) de ataques y abusos después de “atacantes anónimos o desconocidos” (57 por ciento). El papel de los actores políticos como fuente primaria y autores principales de la violencia online contra mujeres periodistas es una tendencia alarmante confirmada por esta encuesta. Mientras tanto, la proliferación de cuentas “*trol*” anónimas y seudónimas complica el proceso tanto de investigar a los perpetradores como de hacerlos responsables. La falta de transparencia y la

capacidad de respuesta limitada de las plataformas, especialmente aquellas donde los ataques son prolíficos, agrava este problema.

(9) Facebook fue calificada como la menos segura de las cinco principales plataformas o aplicaciones utilizadas por los participantes, con casi el doble de encuestadas que la calificaron como “muy insegura” en comparación con Twitter. También atrajo tasas desproporcionadamente más altas de informes de incidentes entre las encuestadas (39 por ciento en comparación con 26 por ciento de Twitter). Teniendo en cuenta el rol de Facebook y Twitter como los principales vectores de ataques en línea contra mujeres periodistas, los niveles de reportes a las empresas de redes sociales demostrados por las en-



cuestadas parecen relativamente bajos. Esto probablemente refleja tanto un sentido de inutilidad asociado con frecuencia con estos reportes, como una reticencia general entre las mujeres encuestadas a plantear estos problemas con el afuera. Además, el hallazgo subraya la urgente necesidad de que las principales empresas de internet cumplan con su deber de cuidado y aborden de manera más eficaz la violencia en línea contra las periodistas.

(10) Solo 25 por ciento de las encuestadas informó a sus empleadores sobre incidentes de violencia *online*. Las principales respuestas que dijeron que recibieron fueron: ninguna respuesta (10 por ciento) y consejos como “ser menos sensible” o “endurecerse” (9 por ciento). El 2 por ciento dijo que se les preguntó qué

hicieron para provocar el ataque. Las encuestadas demostraron la existencia de un doble impedimento para la acción efectiva para enfrentar la violencia en línea experimentada en el curso de sus empleos: bajos niveles de acceso a los sistemas y mecanismos de apoyo, y a la vez bajos niveles de conciencia sobre la existencia de medidas, políticas y pautas para abordar el problema.

(11) Las mujeres periodistas encuestadas indicaron con mayor frecuencia (30 por ciento) que responden a la violencia en línea que experimentan autocensurándose en las redes sociales. El 20 por ciento describió cómo se retiraron de toda interacción en línea y 18 por ciento evitó específicamente la participación del público. Tales actos, que podrían

considerarse medidas defensivas empleadas por las mujeres para preservar su seguridad, demuestran la efectividad de las tácticas de ataque en línea: están diseñadas para desprestigiar el periodismo crítico, silenciar a las mujeres y amordazar la verdad.

(12) La violencia *online* tiene un impacto significativo en el empleo y la productividad de las mujeres encuestadas. En particular, 11 por ciento informó haber faltado al trabajo, 38 por ciento se retiró de la visibilidad (por ejemplo, pidiendo que las sacaran del aire o refugiándose detrás de seudónimos), 4 por ciento renunció a sus trabajos y 2 por ciento incluso abandonó el periodismo por completo. Si bien algunas de estas cifras pueden parecer pequeñas, este es un indicador significativo del poder destructivo del problema. Estos datos también demuestran las implicaciones negativas de la violencia en línea para la diversidad de género en (y a través de) los medios de comunicación.

En definitiva, los primeros resultados de esta encuesta muestran que la violencia en línea contra las mujeres periodistas es un fenómeno mundial que exige una acción urgente. Para que se mantenga la libertad de expresión, para que florezca la diversidad en el periodismo y para que el acceso a la información sea igualitario, las mujeres periodistas deben ser vistas y escuchadas.

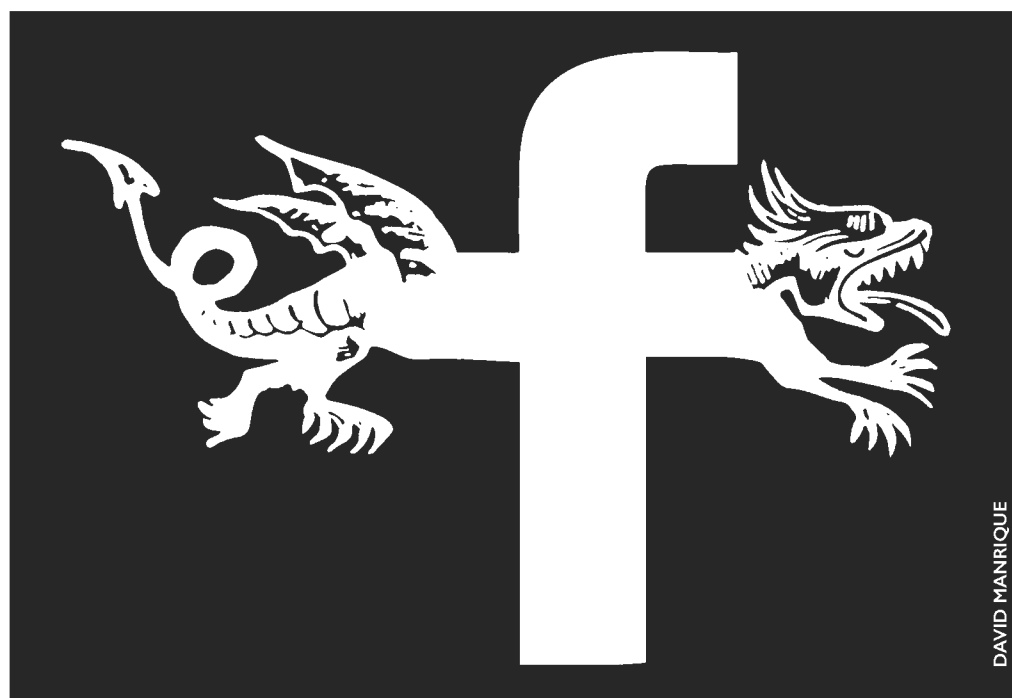
El clima de impunidad que rodea a los ataques en línea plantea preguntas que exigen respuestas. La impunidad envalentona a los perpetradores, desmoraliza a la víctima, erosiona los cimientos del periodismo, exacerba los riesgos para la seguridad del periodismo y socava la democracia.

Basándose en estos hallazgos inquietantes, en el informe se presentan nueve recomendaciones de acción dirigidas a los gobiernos, las plataformas de redes sociales y los empleadores de la industria de los medios. ◀

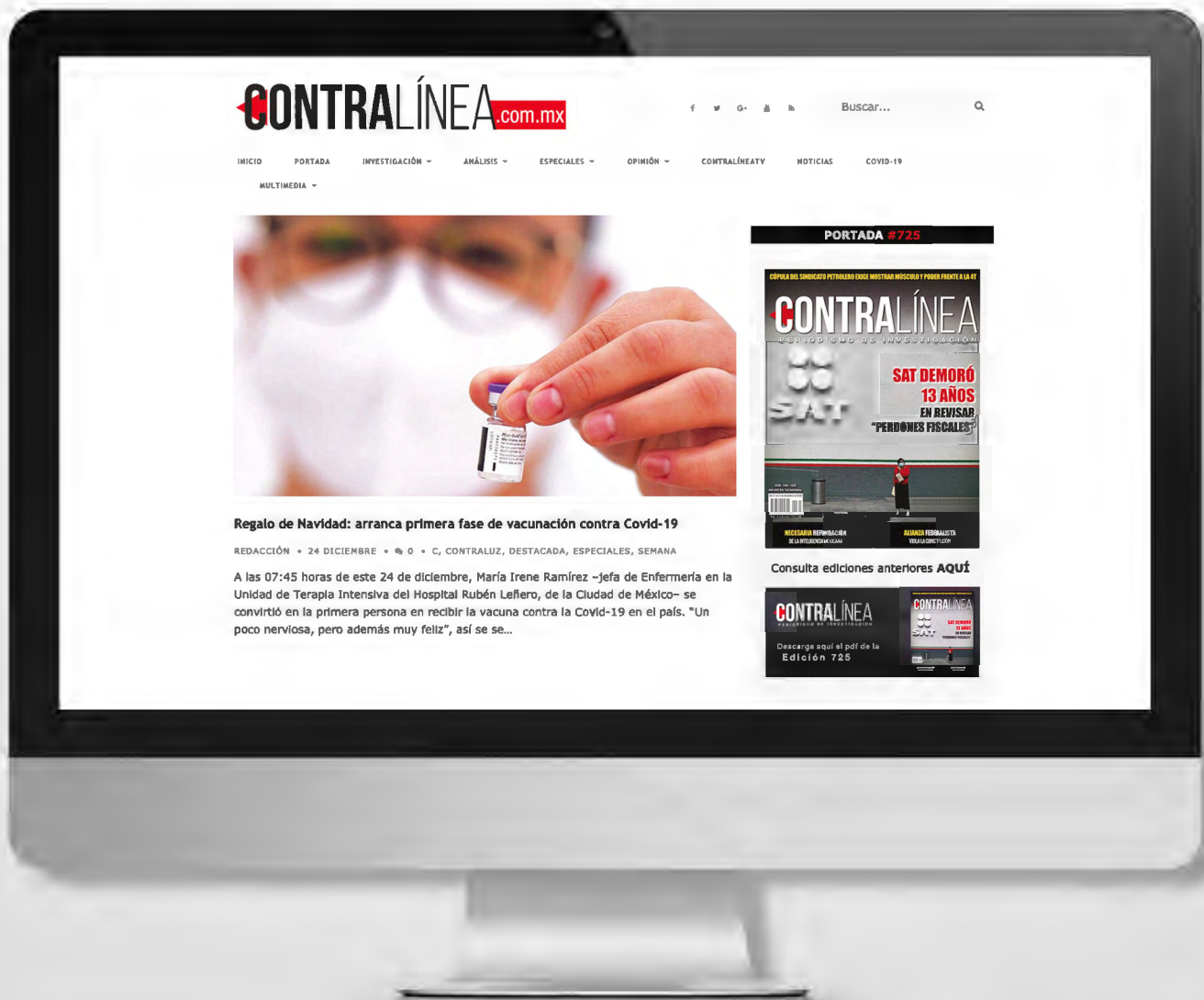
“

La impunidad envalentona a los perpetradores, desmoraliza a la víctima y erosiona los cimientos de periodismo y la democracia

”



VISITA NUESTRA **PÁGINA** WEB



www.contralinea.mx

y consulta todos nuestros contenidos

◀ CONECTA CON NOSOTROS



CONTRALÍNEA
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN



SÍGUENOS EN
www.contralinea.com.mx
Y EN NUESTRAS REDES SOCIALES

 **facebook.com/contralinea**  **@contralinea**  **Revista Contralinea**

Fortuna

Negocios y Finanzas

En línea

revistafortuna.com.mx

